



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO

**LA DESTITUCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EN
EL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
MÉXICO**

TESIS

Que para obtener el Título de

LICENCIATURA EN DERECHO

P r e s e n t a

C. HERRERA DE LA LUZ ALAN EUSEBIO

Asesor: DR. EN DER. ROBERTO SANROMÁN ARANDA

Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx. mayo 2021



RESUMEN

El presente trabajo abordará una de las problemáticas ante las cuales el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México ha tenido que hacer frente por mucho tiempo y es el cumplimiento de sentencias por parte de los Servidores Públicos del Estado de México y de sus Municipios. Esto con el objeto de que lo anterior sea considerado como una Responsabilidad Administrativa grave, sancionada por medio de la destitución de la Autoridad de su cargo y así hacer prevalecer el derecho de los gobernados a una justicia Administrativa basada en los principios rectores del Proceso Administrativo y del Tribunal.

Lo anterior se logrará desglosando las fases del Contencioso Administrativo y hacer un énfasis en la fase de “cumplimiento de sentencia” esto con la idea de hacer más efectivo las sanciones que deben ser aplicadas a las Autoridades que incumplan en lo condenado en la ejecutoria.

Además de poder resolverlo a través de una regulación más completa a las leyes Administrativas en el Estado de México sobre el incumplimiento de sentencias y a través de un procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el que colaboren las Secciones, Salas Regionales y Especializadas del Tribunal para subsanar y resolver el Procedimiento, a fin de dar una destitución fundada y motivada, pero que también permita dar cumplimiento a la sentencia del Proceso Administrativo.

ABSTRACT

This paper will address one of the problems that the “Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México” has had to face for a long time and that is compliance with sentences by the Public Servants of the “Estado de México” and its Municipalities. This in order for the above to be considered as a serious Administrative Responsibility, sanctioned by means of the dismissal of the Authority from its position and thus be able to make prevail the right of the governed to an Administrative Justice based on the guiding principles of the Administrative Process and the Court.

The foregoing will be achieved by breaking down the phases of the Administrative Litigation and emphasizing the phase of "compliance with judgment" with the idea of making more effective the sanctions that must be applied to the Authorities that fail to comply with what is condemned in the execution.

In addition to being able to resolve it through a more complete regulation of the Administrative laws in the State of Mexico on non-compliance with judgments and through an Administrative Responsibility procedure in which the Sections, Regional and Specialized Chambers of the Court collaborate as Investigating authorities, Substancers and Resolutors, in order to give a founded and motivated dismissal, but that allows compliance with the judgment of the Administrative Process.

INDICE

INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTOS GENERALES EN MATERIA PROCESAL ADMINISTRATIVA	11
1.1 ANTECEDENTES DE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO	11
1.2 DEFINICIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU COMPETENCIA	15
1.3 LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL COMO LA PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO	17
1.4 DEFINICIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO LLEVADO ANTE LAS SALAS REGIONALES	18
1.5 PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	21
1.6 ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO:	27
INTERPONER DEMANDA	27
1.6.1 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA	30
1.6.2 AUDIENCIA DE LEY, DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS	31
CAPÍTULO SEGUNDO: LAS SENTENCIAS Y SUS EFECTOS	33
2.1 DEFINICIÓN DE LA SENTENCIA Y LA IDENTIFICACIÓN DE SUS REQUISITOS	33
2.2 LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO	39
2.3 EFECTO DE LA SENTENCIA CUANDO SE DETERMINA LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO	41

2.4 EFECTO DE LA SENTENCIA CUANDO SE DETERMINA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO	44
2.5 EL RECURSO DE REVISIÓN	46
CAPÍTULO TERCERO: CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA	48
3.1 EL CAUSE EJECUTORIA DE UNA SENTENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO	51
3.2 LA COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA CUANDO CAUSE EJECUTORIA	52
3.3 FASE DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA	53
3.4 LA DESTITUCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LAS SECCIONES DE SALA SUPERIOR COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS	59
CAPÍTULO CUARTO: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	64
4.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	67
4.2 LOS GRADOS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECONOCIDOS POR LA LEY	70
4.3 SANCIONES QUE SE DETERMINAN EN LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	78
4.4 EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA LLEVADO A CABO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO	83
CAPÍTULO QUINTO. LA DESTITUCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS COMO SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO	87
5.1 EL INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS COMO UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	88
5.2 IDENTIFICACIÓN DE LEYES APLICABLES AL CASO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	92

5.2.1 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	92
5.2.2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO	94
5.2.3 LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO	95
5.2.5 LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	98
5.3 EL GRADO DE RESPONSABILIDAD APLICABLE AL INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y LAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN REGULAR EN LAS LEYES ADMINISTRATIVAS PARA LA DESTITUCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS POR PARTE DE LAS SECCIONES DE SALA SUPERIOR	99
5.4 PROPUESTA PARA UN PROCEDIMIENTO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA	107
CONCLUSIONES.	115
FUENTES DE INFORMACIÓN	120
GLOSARIO	125

INTRODUCCIÓN

La Justicia Administrativa tiene como principal objetivo proteger a los gobernados ante los actos de las Autoridades, esto se traduce al sentido de que, en el actuar de los Servidores Públicos, las acciones u omisiones que se generen con el ejercicio de sus obligaciones y estas afecten a los gobernados, la ley debe amparar a los particulares con el fin de salvaguardar sus derechos y sobre todo castigar a los responsables por sus acciones contrarias a la ley.

El presente trabajo, abordará el tema de la destitución de los Servidores Públicos, por parte de las Secciones de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, ante el incumplimiento de sentencias que pongan fin al Proceso Administrativo y en donde se condenen los actos emitidos por las Autoridades pertenecientes a la Administración Pública Estatal y Municipal, así como sus Organismos Auxiliares.

En el sentido de esta investigación, ante las omisiones y actuaciones de las Autoridades que no dan por cumplidas las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal, existen una serie de medidas que, a través de la ley, este Órgano Jurisdiccional ejecuta con el fin de obligar a la Autoridad a dar cumplimiento a lo ordenado en una resolución, como última medida el Tribunal por conducto de las Secciones de Sala Superior, determina la destitución del Servidor Público con el fin de que los intereses de los gobernados, que la sentencia trata de proteger, sean salvaguardados y no sean de nueva cuenta vulnerados por un nuevo actuar de las Autoridades, además de que las Autoridades inmersas en este incumplimiento serán acreedores de Responsabilidad Administrativa.

Es importante resaltar que las leyes aplicables al caso anterior determinan al incumplimiento de lo ordenado en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México como una razón para ser sujeto de Responsabilidad Administrativa,

pero no determinan al incumplimiento de las sentencias como una Responsabilidad Administrativa y con esto tampoco se detallan las medidas y determinaciones que Sala Superior debe tomar a consideración en caso de omisión al cumplimiento de las sentencias emitidas por las Salas Regionales para destituir a los Servidores Públicos, de lo anterior, se trabajará en que la destitución y cumplimiento de sentencia se lleven a cabo en un solo procedimiento y que en este colaboren las Salas Regionales, Salas Especializadas, Secciones de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a fin de evitar el atraso en el Proceso Administrativo y hacer más completas las medidas ante las omisiones de las Autoridades y evitar la Responsabilidad de las mismas.

De aquí la importancia de determinar esta figura como una Responsabilidad Administrativa grave a fin de que, ante esta situación, las leyes aplicables contemplen una regulación concreta y se tenga por protegido los intereses de los gobernados que son vulnerados al generarse dicho incumplimiento.

Ante lo planteado es importante tener presente la figura del Contencioso Administrativo que se lleva ante las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, esto con el fin de ir desglosando una serie de actos como la procedencia del juicio, la audiencia, alegatos, comunicación de actos procesales, sentencia, tipos de condena y el cause ejecutoria de la misma, los cuales darán como resultado el incumplimiento de la sentencia y teniendo presente esta fase, desglosaremos la naturaleza de la Responsabilidad Administrativa a fin de adaptar dicho incumplimiento a la legislación existente y con esto poder dar una propuesta completa al planteamiento del problema.

Por lo tanto, los cuatro principales factores para el desarrollo de esta investigación se verán reflejados en; primero el desarrollo de las etapas del Contencioso Administrativo, esto con la idea de tener presentes las etapas que lo componen y como cada una de ellas, desarrolladas correctamente dan paso a la fase de cumplimiento. Segundo las

sentencias, sus efectos y la fase cumplimiento de esta, desde los requerimientos hasta el señalamiento de destitución. Tercero, la Responsabilidad Administrativa y por último la definición al incumplimiento de sentencia y una sugerencia de un Procedimiento para sancionar por Responsabilidad a las Autoridades que son omisas en lo ordenado por una sentencia administrativa.

Utilizaremos el método deductivo ya que, las fases del Contencioso Administrativo las abordaremos desde un punto de vista general, con la idea de ir adaptando cada fase al punto central de la investigación e ir señalando los actos procesales necesarios para la investigación.

Utilizaremos una metodología teórica debido a que, nos basaremos en lo determinado por la hipótesis planteada en el marco de esta investigación.

En el caso del señalamiento de los antecedentes del Tribunal y de la Responsabilidad Administrativa, utilizaremos una metodología histórica, con la intención de señalar los antecedentes más importantes y necesarios para el entendimiento de ambos temas.

Para los resultados empleados ante lo regulado por la legislación aplicable de la Responsabilidad Administrativa, utilizaremos un método analítico, esto con la idea de tomar las bases planteadas ante las regulaciones de otras sanciones por faltas Administrativas y adaptarlo a una pronta regulación ante la destitución de Servidores Públicos por el incumplimiento de sentencia

CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTOS GENERALES EN MATERIA PROCESAL ADMINISTRATIVA

1.1 Antecedentes de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México 1.2 Definición del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y su competencia 1.3 Las Salas regionales del Tribunal como la Primera Instancia en el Proceso 1.4 Definición del Proceso Administrativo llevado ante las Salas Regionales 1.5 Procedencia del Juicio Contencioso Administrativo. 1.6 Etapas del Proceso Administrativo: Interponer demanda 1.6.1 Contestación a la demanda, 1.6.2 Audiencia de ley, desahogo de pruebas y alegatos.

La relevancia de la narrativa de este capítulo radica en la importancia de conocer la materia de la que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México es competente, así como tener presente su estructura jurisdiccional que se encuentra distribuida por todo el territorio del Estado de México y que de esa manera permite el alcance de los particulares a la protección de sus derechos en materia de su competencia.

1.1 ANTECEDENTES DE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO

Antes de definir las cuestiones necesarias para el entendimiento de la naturaleza del Tribunal, así como el de la materia Administrativa señalemos unos antecedentes de este, a fin de que su entendimiento, estructura, jurisdicción, y autonomía y su función sean precisados y el porqué de la importancia de la existencia de estos a nivel Estatal.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que estos tienen su origen gracias a la creación de los Órganos Juzgadores Federales en materia Fiscal y Administrativa.

El Estado de México con el objetivo de hacer frente al ejercicio ilegal de las autoridades y hacer posible la justicia administrativa, adoptó la doctrina francesa, plasmada en la Ley Orgánica Judicial de 1970 ante la cual por primera vez se estructura el Contencioso Administrativo. Desde entonces, esta institución influenciada en nuestro país, políticas públicas orientadas a tutela con mayor fortaleza los derechos fundamentales de los gobernados, así el registro histórico nos recuerda que el 1o. de enero de 1937 entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal con lo cual inició sus actividades el Tribunal Fiscal de la Federación. (Rivera, 2020, pág. 228)

En materia Federal con la entrada en vigor el 1º de enero de 2006 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo le fue otorgada plena jurisdicción al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entendida ésta no solo lo referente a la condena sino que se le otorgan las facultades para exigir el cumplimiento de sus sentencias, estas facultades como lo veremos más adelante surgen del artículo 17 Constitucional referida a su apartado que indica que “las leyes Federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los Tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.” (Olmos, 2010, pág. 11)

La importancia del señalamiento de estos dos antecedentes permite entender la naturaleza de la creación de los Tribunales Estatales, así como el otorgamiento de la autonomía a los mismos, para dictar sus fallos y exigir el cumplimiento de lo que ordenan, así como sus procedimientos.

El Tribunal como órgano, en un principio se pronunciaba como Tribunal Fiscal del Estado, y es que con la creación del Tribunal Federal se dio paso a su creación, este no conocía únicamente de la materia fiscal sino de asuntos de Responsabilidad Administrativa, reconocidos en la ley aplicable en ese momento. (García M. , 2019, págs. 154, 155)

Entre la existencia de este Tribunal y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, existió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México trasciende mediante la creación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de México, expedida el 26 de diciembre de 1986. Entre las disposiciones que rigen en la actualidad al Tribunal se encuentran el Código Administrativo del Estado de México y sus reglamentos, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Reglamento Interior del Tribunal y la Jurisprudencia. (Rivera L. , 2020, pág. 235)

Autores como Delgadillo y Lucero determinan que *“la existencia de un procedimiento Contencioso Administrativo permite a los gobernados una posibilidad más para la defensa de sus intereses frente a los actos ilegítimos de la administración que en el sentido del Tribunal trasciende a la protección de los mismos ante los actos u omisiones de la Administración Pública Estatal y Municipal.”* (Delgadillo y Lucero, 2004, pág. 293)

El término contencioso en su aspecto general significa *“contienda, litigio, pugna de intereses. Es el juicio seguido ante un juez competente sobre derechos o cosas que disputan entre si las partes en pugna”*. (Delgadillo y Lucero, 2004, pág. 293)

De esta manera, estos autores determinan desde un punto de vista formal que en la figura de lo Contencioso Administrativo los órganos competentes, conocen de las controversias que provocan la actuación administrativa de las Autoridades e Instituciones ya sea en su nivel Estatal o Municipal y en un punto de vista material, este procedimiento se presenta cuando la controversia es generada por un acto de la Administración que lesiona intereses jurídicos o legítimos de los particulares. (Delgadillo y Lucero, 2004, pág. 293)

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un principio era competente para conocer asuntos en materia Administrativa, Fiscal y Responsabilidad Administrativa, pero a través de una serie de reformas a la ley, en 1990 la Responsabilidad Administrativa dejó de ser competencia por materia para el Tribunal.

El 4 de febrero de 1997 se abroga la Ley de Justicia Administrativa del Estado de México y entra en vigor El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dando una nueva etapa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Durante 2016, con el plan de combatir la corrupción, fue reformada la Constitución Federal, creándose el Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) y con esto se vuelve a otorgar a los Tribunales Administrativos la competencia por materia para conocer de los asuntos y procedimientos de Responsabilidad Administrativa, no solo de los Servidores Públicos, sino que además de los particulares, a través de un procedimiento que está contemplado en la ley de la materia. (García M. , 2019, pág. 160)

La creación de este sistema dio paso a una serie de reformas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de la cual destaca la dotación de autonomía para el Tribunal, la extinción y creación de ciertos órganos que componen al mismo y por lo tanto también se dio la transición del “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” a “Tribunal de justicia Administrativa del Estado de México”.

El 30 de mayo de 2017 se publica la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México con la cual se marcaba el inicio de una nueva etapa en la impartición de Justicia Administrativa en el Estado de México. El Tribunal, más allá de tener una nueva denominación, obtuvo nuevas atribuciones y responsabilidades entre ellos, formar parte del SNA con la competencia de conocer de los procedimientos de faltas administrativas graves, creándose Salas y Secciones Especializadas en la materia, sin dejar de lado su competencia en los Procesos Administrativos y Fiscales. (García M. , 2019, pág. 160)

Como hemos podido determinar, el Tribunal al igual que el resto de los Tribunales locales tienen su origen mediante la creación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero también, actualmente se ha pronunciado fuertemente ante el combate con la corrupción y que gracias a ello crea sus Salas y Secciones Especializadas en materia de Responsabilidad Administrativa.

Debemos tomar en cuenta que estos Órganos Juzgadores pertenecen al Poder Ejecutivo Estatal y gozan de autonomía, la cual se encuentra reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116 fracc. V.¹

De igual forma, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México reconoce la existencia de Tribunales locales para dirimir controversias, Tribunales que en su artículo 87 de manera más clara y precisa establece lo siguiente:

“El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá y resolverá las controversias que se susciten entre las administraciones públicas estatal o municipales y organismos auxiliares con funciones de Autoridad y los particulares y tendrá plena autonomía para dictar sus fallos.”

1.2 DEFINICIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU COMPETENCIA

Este órgano es definido como *“un eje rector para la Administración Pública que busca lograr el perfeccionamiento constante de sus actuaciones, el respeto al derecho humano, a una buena administración y la proporcionalidad entre el interés público y los Derechos Fundamentales el cual tiene por objeto dirimir las controversias de carácter Administrativo y Fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, Municipios, Organismos Auxiliares con funciones de Autoridad y los particulares.”* (Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 2020)

Como se mencionó el artículo 87 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México reconoce la existencia del Tribunal para dirimir controversias. Sus objetivos además de los ya mencionados son: dirimir las controversias que se susciten entre las Autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los Municipios, Organismos Auxiliares Estatales o Municipales y los particulares; imponer sanciones a los Servidores Públicos Estatales y Municipales por Responsabilidad Administrativa grave y a los particulares

¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 116 Fracc. V: Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal.

Salvaguardar los intereses de los gobernados ante los actos violatorios de las Autoridades Estatales y Municipales es otro de los objetivos fundamentales del Tribunal pues esto se aterriza en la idea de que funciona como Órgano Jurisdiccional que, con sus atribuciones, debe garantizar la protección de los derechos de los gobernados que buscan justicia ante los actos de las Autoridades pertenecientes a las Instituciones Públicas Estatales y Municipales.

“Constitucionalmente no existe ninguna limitante para que los Tribunales Administrativos puedan hacer cumplir sus resoluciones, ni para que puedan fijar en sus fallos los señalamientos a seguir por las Autoridades condenada a la reparación de las violaciones legales cometidas”. (Muciño, 2010, pág. 85)

Con lo anterior entendemos que el artículo señalado (116 fracc. C.P.E.U.M.) mantiene la intención de la creación de este Tribunal Administrativo para dotarlo de jurisdicción y así hacer una convivencia eficaz en la impartición de justicia, pero también que a través de medidas el Tribunal puede hacer valer el cumplimiento de sus resoluciones, respetando siempre los derechos de los gobernados y de las Autoridades.

La jurisdicción del Tribunal se entenderá entonces como una potestad, derivada del poder del Estado, para dirimir conflictos personales de la población, utilizando la ley como medio para que se cumpla una condena establecida en este caso por un Magistrado, así también de una forma espacial se entiende el asignado por una Autoridad competente para que el Tribunal pueda hacer uso de sus capacidades para el ejercicio del derecho, respetando las competencias del mismo.

Por otro lado, la competencia del Tribunal se entiende como la potestad establecida por el Estado para conocer un determinado conflicto ya sea por materia, cuantía, grado y territorio, que a continuación determinaremos cada una de ellas de acuerdo con la naturaleza del mismo.

Por Materia: el Tribunal tiene competencia para conocer asuntos en materia Administrativa, Fiscal y Responsabilidad Administrativa.

Por Cuantía: El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México (de ahora en adelante C.P.A.E.M.) establecerá la cuantía para Juicios Administrativos en Vía Sumaria.

Por Grado. Estableciendo a las Salas Regionales como la primera instancia para conocer de los asuntos de su competencia.

Por Territorio: el Tribunal conocerá de los asuntos de su competencia en todo el territorio del Estado de México, para lo cual tendrá nueve Salas Regionales (dos de ellas Especializadas en Responsabilidad Administrativa).

Las Salas Regionales fungen un papel importante en la impartición de la justicia Administrativa, pues estas son el medio de conexión entre el particular afectado y la justicia Administrativa, las cuales en términos de competencia por grado permiten tener acceso a este alcance.

1.3 LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL COMO LA PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO

La Ley Orgánica del Tribunal de justicia Administrativa del Estado de México nos establece que, dentro de la estructura de este órgano, estará integrado por Salas Regionales.²

Retomando la cuestión de que actúan como primera instancia, las Salas podrán conocer de asuntos relacionados en Materia Administrativa y Fiscal, que se susciten

² Ley orgánica del Tribunal de justicia Administrativa del Estado de México Art. 5. El Tribunal se integrará por: I. Una Sala Superior que se compone de la manera siguiente: a) Secciones de Jurisdicción Ordinaria, y b) Sección Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas. II. Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria; III. Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas; IV. Magistratura Consultiva; y V. Magistraturas Supernumerarias. Lo anterior sin perjuicio de que el Tribunal pueda crear nuevas Salas Regionales y Secciones, de acuerdo a las cargas de trabajo y la disponibilidad presupuestal.

en contra de actos y disposiciones generales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las Autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, Municipal y los organismos auxiliares de carácter Estatal y Municipal, pero también de los asuntos relacionados a la Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos o de las que puedan ser los particulares.

Nueve Salas Regionales son las que forman parte de la estructura jurisdiccional del Tribunal las cuales se encuentran distribuidas en el territorio del Estado de México de la siguiente manera:

La primera y séptima con residencia en el Municipio de Toluca, la segunda con residencia en Naucalpan de Juárez, la tercera con residencia en Tlalnepantla, la cuarta con residencia en Ecatepec de Morelos, la quinta con residencia en Nezahualcóyotl, la sexta con residencia en Atizapán de Zaragoza, la octava y novena Salas Regionales son Especializadas en materia de Responsabilidad Administrativa, la primera de estas con residencia en Toluca y la segunda en Atizapán de Zaragoza. Cada una integrada por un Magistrado, Secretario Proyectista, Secretario de Acuerdos, Actuario, Asesoría Comisionada, Notificador, Oficialía de Partes y Mesas de Trámite.

Tendrán su competencia por razón de territorio de acuerdo con el domicilio de la parte actora. Así también en conflictos relacionados a bienes muebles o inmuebles y los relacionados a empresas o comercios, estas serán competentes en el Municipio donde esté ubicado el inmueble vinculado con la materia del conflicto, según sea el caso.

Una vez entendido la estructura jurisdiccional de Tribunal podemos pasar a describir el proceso Administrativo que se lleva a cabo en las Salas Regionales.

1.4 DEFINICIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO LLEVADO ANTE LAS SALAS REGIONALES

Entendida la naturaleza del Tribunal y la manera en la que delega las funciones esenciales para la impartición de justicia a las Salas Regionales, es momento de definir al Proceso Administrativo. El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de

México en su artículo primero lo define como *“Serie de etapas del juicio Contencioso Administrativo, la acción popular, el recurso de revisión y el cumplimiento de sentencia.”*

Alberto Fernández Madrazo define al Proceso Administrativo como *“el conjunto de normas, debidamente ordenadas, sistematizadas, y jerarquizadas cuyo objeto específico es el ejercicio de la función jurisdiccional administrativa y la protección de los administrados frente a la Administración Pública, así como mantener la eficacia del Derecho Administrativo a través de la función jurisdiccional.”* (Fernández A. , 2011, pág. 36)

Aun cuando ambas definiciones se complementan entre sí, existe un factor en común y es “serie de etapas” y son las que componen al Proceso Administrativo que se describirán más adelante.

Hay que tener en cuenta que la palabra proceso involucra una *“serie de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas en la solución de una controversia, y de otros sujetos quienes, aunque no se encuentran directamente vinculados con el litigio, son llamados por determinada circunstancia. Estos actos se concatenan y son juzgados por el Órgano Jurisdiccional al emitir una sentencia que pone fin a dicha controversia.”* (García, 2012, pág. 59)

Con el objeto de establecer una relación entre lo definido y la conceptualización de la palabra proceso desglosaremos tres puntos relevantes de este último y en cada uno estableceremos su relación con las figuras que se pueden encontrar dentro de una contienda Administrativa. Lo primero es determinar la parte que establece *“de las partes interesadas en la solución de una controversia”*, dentro de una contienda Administrativa encontraremos a las partes interesadas actuando en carácter de actor (persona física o moral) y la Autoridad demandada, está en su carácter de ordenadora y/o ejecutora, aunque existen casos en que la Autoridad pueda actuar como actor, esto en resoluciones fiscales que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, mejor conocido como juicio de lesividad o en controversias que se presenta en una resolución de carácter Administrativo o Fiscal que afecte a otra Autoridad.

Lo segundo por analizar es la parte en la que establece “*otros sujetos quienes, aunque no se encuentran directamente vinculados con el litigio, son llamados por determinada circunstancia*” en materia Administrativa se puede presentar la figura de tercero interesado, el cual puede ser una persona (física o moral) o una Autoridad Estatal o Municipal y cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal.

Por último, en el apartado de “*Estos actos se concatenan y son juzgados por el Órgano Jurisdiccional al emitir una sentencia que pone fin a dicha controversia*”, nos hace referencia al proceso que se lleva en este caso ante las Salas del Tribunal y que, una vez analizado los hechos controvertidos y demás derechos y acciones hechos valer por las partes, el Magistrado dictará una sentencia en la que condenará a unas de las partes.

Con esto tenemos que el Proceso Administrativo es una serie de etapas llevadas ante las Salas del Tribunal, que tendrá por objeto resolver las contiendas en materia Administrativa y Fiscal que se susciten entre los particulares y los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal, en donde deberá resolverse el fondo del asunto por medio de una sentencia, respetando siempre las normas y principios que componen a esta figura. Pero, también se integra por la acción popular, el cumplimiento de la sentencia y de los procedimientos llevados ante la Sala Superior, como el Recurso de Revisión, esto último en términos del Código Adjetivo de la materia para el Estado de México.

Teniendo presente la definición del Proceso Administrativo, es importante establecer la diferencia entre Procedimiento Administrativo y Proceso Administrativo ya que, el presente trabajo se enfoca en las resoluciones emitidas durante un proceso y no en el procedimiento.

El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece disposiciones, normas y formalidades para ambas figuras, las cuales son aplicables a órganos de la Administración Pública Estatal, Municipal, organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal y para el Tribunal, un ejemplo de lo anterior es lo relacionado a las notificaciones, pruebas, etc.

Esta ley define al Procedimiento como *“una serie de trámites que realizan las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal o Municipal, con la finalidad de producir y, en su caso, ejecutar un Acto Administrativo.”*³

Fernández Jorge lo define *“como al conjunto de actos metódicamente articulados con el propósito específico de regular la intervención de quienes pueden participaren la conformación o impugnación de toda declaración de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa, destinada a producir efectos jurídicos respecto de casos específicos.”* (Fernández J. , 2016, pág. 155)

De lo mencionado, es importante destacar que en el Procedimiento Administrativo se lleva ante las Autoridades Estatales o Municipales, las cuales al llevar algún acto establecido en sus disposiciones y que sea de su competencia, darán una resolución, que podrá ser impugnada mediante un Recurso Administrativo de Inconformidad y de igual por medio del Juicio Contencioso Administrativo, de ahí que los apartados en el Código Adjetivo mencionado establece dentro de la procedencia del juicio las resoluciones o violaciones cometidas en las mismas o durante el Procedimiento Administrativo.

Las resoluciones en el Procedimiento Administrativo no son la única procedencia que da inicio a una Contienda Administrativa, los actos de Autoridad también son materia de conocimiento en un Proceso Administrativo, además de estas el C.P.A.E.M. nos establece diez posibles puntos de partida para el Contencioso Administrativo.

1.5 PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Referente a la naturaleza de este trabajo de investigación, nos enfocaremos solamente en la procedencia del juicio en contra de las Autoridades, es decir en donde la Autoridad funja como demandado y el particular (persona física o moral) como actor, el porqué de esto radica en que las condenas a las Autoridades son parte fundamental

³ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Art. 1 Fracc. IX

de esta investigación, la razón es que, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que desempeña un Servidor Público este en su actuar o en las omisiones que se generen, podrá ser sancionado con una falta que para este caso puede recaer en una destitución, si se presenta el caso contrario en que una Autoridad actúe como demandante y el particular como demandado no podría presentarse dicho sanción.

Entendiendo esto es importante señalar que las Autoridades demandadas solo podrán ser las que se encuentren dentro del territorio del Estado de México y que además pertenezcan al Poder Ejecutivo Estatal, Municipal o funjan como Organismos Auxiliares de carácter Estatal o Municipal, a continuación, definiremos cada una de las partes.

Existen dos tipos de sujetos que pueden intervenir en el Proceso Administrativo, el primero de ellos son las personas definidas como *“todo sujeto susceptible de ser titular de derechos y obligaciones.”*

Estas se dividirán en dos, la primera es una persona física, que, en términos generales, nos referiremos a *“los seres humanos”* y personas morales *“los entes que tiene una vida jurídica inmaterial”* dentro de esta encontramos sociedades, Estados, Municipios, asociaciones, etc. (Rangel J. y Sanromán R., 1995, pág. 18)

En este sentido aterrizaremos la idea de que ya sea una persona física o moral, será quien se desempeñe como parte actora en el Proceso, con esto es importante aclarar que cuando hagamos referencia al término “gobernado” es con relación a estas, pues en ocasiones la ley o algunos autores se refieren así a la parte afectada en el Contencioso Administrativo.

Ahora la segunda parte que interviene es una Autoridad o Servidor Público, la definición de su naturaleza nos ayudará a entender mejor el papel que desarrolla en el Contencioso Administrativo y más adelante en lo referente a la materia de Responsabilidad Administrativa, pues dicha materia es aplicable a los Servidores Públicos.

El C.P.A.E.M. define a la Autoridad como los entes del Poder ejecutivo del Estado, Municipios y Organismos Auxiliares, a quienes se les atribuye el dictado o ejecución de los actos o resoluciones Administrativas o Fiscales.⁴

De manera específica nuestra constitución federal determina como Servidor Público a todo aquel que desempeñe un cargo en la Administración Pública, así como a los representantes de elección popular, a los miembros del poder judicial y a los demás funcionarios y empleados.⁵

La constitución del Estado de México los identifica como *“toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, organismos autónomos, en los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos”*.⁶

Con estos tres señalamientos entendemos que Servidor Público es toda aquella persona que desempeña un cargo público y para el caso de nuestra investigación, aquella que a través de las facultades que le son encomendadas en la ley emiten actos o resoluciones en materia Administrativa o Fiscal, en los límites de su competencia y forman parte de la Administración Pública del Estado de México y sus Municipios.

Además, están su actuar está basado en principios como imparcialidad, legalidad, transparencia y honradez, así como realizar con apego a la ley, una serie de obligaciones encomendadas por las mismas como el cumplir el servicio que le sea encomendado y evitar por de cualquier motivo algún acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o pueda generar abuso o ejercicio indebido de un empleo, el respeto en el desempeño de sus actividades, dirigirse con respeto a

⁴ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Artículo 1, fracción II

⁵ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Cuarto de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado, artículo 108

⁶ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Título Séptimo de A RESPONSABILIDAD de las y los Servidores Públicos del Estado, Patrimonial del Estado, del Sistema Estatal Anticorrupción y del Juicio Político, artículo 130

sus subordinados y a la sociedad, realizar rendición de cuentas y hacer cumplir el Servicio Público. (García S. y Uribe E., 2014, págs. 147,148,149)

En este sentido aterrizaremos la idea a nuestra investigación y que, en este caso la autoridad será quien desempeñe como parte demandada en el Proceso, esto porque el acto o resolución que emitió afecta los intereses y derechos de la parte actora, es decir el gobernado o persona física o en su caso moral.

Definidas las partes en el Proceso, a continuación, señalaremos las fracciones del artículo 229 de la ley mencionada para establecer las cuestiones por las cuales una Autoridad puede fungir como demandado.

El artículo mencionado nos establece que la procedencia del Contencioso Administrativo estará regulada bajo nueve fracciones que permiten al actor interponer demanda de acuerdo con los supuestos señalados por el artículo.

De primer momento, tenemos identificado en la fracción I, II y IX, las cuales determinan en la procedencia las resoluciones o actos Administrativos y Fiscales que sean ordenadas, dictadas o ejecutadas por las Autoridades del Poder ejecutivo del Estado o de los Municipios, así como aquellas que ostenten un cargo de Autoridad sin serlo.

Esto se refiere por una parte a lo que hemos venido analizando con anterioridad, al Procedimiento Administrativo llevado a cabo en las Autoridades señaladas y que, debido a una falla en el procedimiento, al mal ejercicio de sus funciones o por la falta de formalidad se puede presentar un Juicio Administrativo.

Además, también se refiere a la ejecución de un Acto Administrativo, que debido a la naturaleza que lo compone, este llega a tener algún error u omisión en los requisitos que lo deben integrar los cuales se encuentran regulados en el artículo 1.8 del Código Administrativo del Estado de México, pero estos los señalaremos más adelante en lo referente a la validez del acto reconocido en la sentencia.

La fracción III del mismo artículo hace referencia al incumplimiento de algún acuerdo de voluntades celebrado entre las Autoridades o las instituciones, lo anterior con la razón que la naturaleza del Derecho Administrativo permite la celebración de estos, la cual una de sus características esenciales es que una de las partes pertenece a la

Administración Pública y la celebración del acuerdo tiene relación con el ejercicio de sus funciones, en donde se puede llegar a presentar una disputa y la cual deberá ser resuelta por el Tribunal.

Las fracciones IV, V, VI se refieren a las resoluciones que se configuren por la omisión de las Autoridades en dar respuesta a las peticiones de los particulares. Esto al presentarse la figura del silencio administrativo, figura que Garzón Saladén Álvaro define como *“un instituto que crea un Acto Administrativo , por negligencia de la actividad administrativa para pronunciarse sobre el derecho de petición en sentido lato, bien por una petición inicial como acto introductorio del Procedimiento Administrativo, que espera una actividad administrativa que culmina en un Acto Administrativo, o bien en el trámite de los recursos en autocontrol administrativo por no pronunciarse en término sobre los recursos interpuestos contra un acto administrativo propiamente dicho o un acto presunto.”* (Garzón, 2015, pág. 85)

una vez presentado el silencio administrativo podrá darse dos posibles respuestas, la negativa y la afirmativa ficta.

La negativa ficta entendida como aquella en que el silencio de la Autoridad ante la petición resuelve de manera negativa al peticionario al no dar respuesta a lo solicitado, por lo tanto, afecta sus intereses, pero también da pauta a que el peticionario pueda impugnar dicha resolución ante el Tribunal.

Para el caso de que transcurrido el plazo de presentada la petición y la Autoridad no resuelve se entiende que hay afirmativa ficta siempre que dicho silencio se entienda un resultado afirmativo a los intereses y derechos del peticionario.

La fracción VII, con la que continua el artículo determina la procedencia del Juicio Contencioso en contra de las disposiciones de carácter general que son emitidas por las Autoridades Estatales o Municipales, que al momento de su emisión o durante su ejecución afecten a derechos de los particulares de imposible reparación.

Las fracciones siguientes son la VIII y X. La razón de señalar estas dos fracciones radica en que son las que permiten a la Autoridad fungir como parte actora, la primera de estas nos establece el juicio de lesividad ya que, cuando una resolución en este

caso Fiscal se presentan dos cuestiones, uno, el resultado a favor a un particular y dos que dicho resultado afecte a la Hacienda Pública, bajo este contexto la resolución emitida podrá ser impugnada ante el Tribunal por parte de la Autoridad afectada. La fracción X establece las violaciones que pueden existir entre Autoridades, en este caso ambas partes del juicio radican como Autoridades.

Para el caso específico de este tema de investigación nos enfocaremos principalmente en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, y IX en razón de que, para la hipótesis planteada en el marco de esta investigación, es necesario conocer de manera específica casos en donde la Autoridad Administrativa o Fiscal haya sido condenada por medio de una sentencia y que no se haya cumplido la misma para dar como resultado lo determinado como “incumplimiento de sentencia” lo cual analizaremos más adelante.

Lo siguiente será definir las etapas del Proceso Administrativo que se desarrollan después de tener presente la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo, esto nos permitirá ir conectando una serie de actuaciones procesales que serán esenciales para dirigirnos y entender como se origina la fase de incumplimiento de las sentencias, conociendo las planteaciones que dan inicio al juicio y que son válidas para esta investigación, las cuales están estipuladas en el artículo 229 del C.P.A.E.M. mismas que ya fueron analizadas.

Es importante mencionar la procedencia del Juicio Sumario, de manera breve entenderemos a este como un juicio más acelerado a diferencia de los que llevan la indicación de ser meramente Administrativos, en donde los plazos y las actuaciones son más rápidas, esto tiene como finalidad construir una vía procesal en donde las actuaciones no requieran tanta tramitación y puedan resolverse de una manera más acelerada.

La procedencia del Juicio Sumario se encuentra regulada por el artículo 272 B del C.P.A.E.M el cual determina que es aquel en donde se demanda lo siguiente:

- “I. Multas impuestas por infracciones de tránsito;
- II. Asuntos cuya cuantía sea menor a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

- III. La omisión de las Autoridades a dar respuesta a las peticiones de los particulares en términos de la fracción VI del artículo 229 del presente Código;⁷
- IV. Apertura de negocios o empresas de bajo impacto o riesgo.”

El resto de las etapas serán llevadas a cabo como lo determina este capítulo, salvo lo relacionado a la audiencia y la admisibilidad de las pruebas, las cuales señalaremos más adelante en el apartado correspondiente.

El principal punto de señalar la procedencia del Juicio Sumario (como se ha señalado en la procedencia del Juicio Administrativo y Fiscal), es que las sentencias que recaen en los mismos (siempre que tengan como condenatoria a una Autoridad), formaran parte de esta investigación, ya que lo que se busca en los resolutivos de esta es la invalidez de los actos Administrativos de las Autoridades Estatales y Municipales,

Esto para tener presente que la destitución de Servidores Públicos por incumplimiento de las resoluciones del Tribunal también puede presentarse en estos juicios.

1.6 ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO:

INTERPONER DEMANDA

Para este apartado nos enfocaremos en las etapas del Proceso Administrativo que van desde la presentación de la demanda hasta la fase de cumplimiento de las sentencias, su importancia radica en conocer las acciones y derechos que hace valer el actor en contra de las Autoridades por incumplimiento en alguna de sus funciones y así establecer como el Tribunal condena a una Autoridad.

⁷ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México artículo 229 Fracc. VI. Las omisiones de las Autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación;

La propia ley es la que nos establecerá los requisitos para que el actor haga valer ante la Autoridad la invalidez del acto que desee impugnar, con lo mencionado, nos referimos a la demanda, la cual definiremos como el acto procesal el cual permite el ejercicio de la acción y la cual va dirigida al juez, para la tutela de intereses colectivos o particulares en la composición jurisdiccional de la litis. (Montilla, 2008, pág. 102)

Esto es que a través de la demanda el individuo presentará las pretensiones en las que trate de hacer valer la invalidez del acto administrativo y las cuales serán tomadas en cuenta al momento de dictar sentencia.

En el Artículo 239 del C.P.A.E.M. se establecen los requisitos que debe contener la demanda y que al tratarse de requisitos formales es necesario cumplirlos para así poder admitirse la demanda y evitar que sea prevenida o desechada. En este apartado analizaremos de manera general los requisitos del artículo ya mencionado para entender mejor la procedencia de la demanda.

El contenido formal de la demanda deberá cumplir con lo siguiente:

El nombre y domicilio del actor (sea persona física o moral); para el caso de personas físicas se deberá acompañar de carta poder en caso de que promuevan en su nombre y en caso de personas morales señalar a representante legal acreditando su persona con poder notarial.

El acto o la disposición general que se impugna; en este caso el acto, resolución, emitido por la Autoridad y en su caso alguna disposición de carácter general Estatal o Municipal emitida por la Autoridad correspondiente.

Las Autoridades o particulares que se demanden; en el primer caso en su carácter de ordenadora, ejecutora o ambas.

Nombre y domicilio del tercero interesado; aquel que sin ser demandado o parte actora, tiene algún interés en el acto y tal como se ha señalado antes, esta figura puede estar o no en el proceso y la ley nos establece que tiene derecho a presentarse a más tardar al día señalado para la audiencia de ley.

Las pretensiones que se deducen; para este apartado la autora Montilla Bracho Johanna define a la pretensión como *“la manifestación de voluntad, emitida en la demanda por un sujeto de derecho (persona natural o jurídica) por la cual atribuyéndose un derecho procura imponer al demandado el cumplimiento de una obligación o el reconocimiento de ese derecho, o la sociedad en general, el respeto a ese derecho si fuera confirmado por el Órgano Jurisdiccional.”* (Montilla, 2008, págs. 99,100)

Podemos observar que se establece que las pretensiones es lo que el actor pedirá al Magistrado resolver al momento de dictar sentencia, un ejemplo de lo anterior es declarar la invalidez del pago predial por cierta cantidad al carecer de fundamentación.

La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto impugnado o fecha en que entró en vigor la disposición general impugnada; la importancia de este punto se ve reflejada porque establece el término que el actor tiene para hacer valer su derecho, el artículo 238 establece que para el caso de presentar la demanda en contra de un acto se tiene el término 15 días para poder hacerlo, para el caso de negativas fictas y omisiones de respuestas a peticiones, esta se presentará en cualquier momento, para las resoluciones fiscales favorables a particulares la demanda deberá presentarse dentro un año siguiente a la fecha de emisión de la decisión y las disposiciones generales serán impugnables, dentro del plazo de treinta días posteriores a la fecha en que entren en vigor.

Los hechos que sustenten la impugnación del actor; las disposiciones legales violadas y las pruebas que se ofrezcan; para estos apartados hay que tomar en cuenta varias cosas, lo primero es que, para el caso de los hechos, deben ser narrados en tiempo, modo y lugar, que se tenga coherencia y para el caso de las pruebas, deben estar relacionadas con los hechos y de manera específica, tener presente que la prueba confesional no es admisible para las Autoridades.⁸

⁸ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 32.- En el procedimiento y proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de las Autoridades administrativas mediante absolución de posiciones.

Solicitud de suspensión del acto impugnado; en caso de que solicite, debemos entender que su principal efecto de la suspensión es mantener las cosas en el estado en que se encuentren y no se otorgará si no es a solicitud de parte o en caso de que se siga un perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio.

Un ejemplo de esto es cuando se tiene un adeudo por el servicio de agua potable con la Autoridad competente se puede solicitar la suspensión para los efectos de que no se interrumpa el suministro de agua potable en el predio del impetrante, por concepto de adeudo del pago de derechos por la prestación de servicios de agua potable y servicio de drenaje y/o descarga de aguas residuales, ni se inicie el procedimiento administrativo de ejecución de los mismos.

Una vez cumplido con los requisitos antes mencionados en tiempo y forma el Tribunal dará pie a acordar lo mencionado para así iniciar el juicio correspondiente, señalar audiencia y notificar a la Autoridad la demanda antes mencionada.

1.6.1 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Esta parte del proceso corresponde a la Autoridad demandada, cuando se dé contestación a la demanda esta podrá surtir dos posibles efectos. El primero de ellos es cuando se da contestación en el plazo señalado por la ley (ocho días en Juicio Administrativo y Fiscal y tres días en Juicio Sumario) se tendrá por admitida en tiempo y forma o habiendo transcurrido el plazo para dar contestación se tendrá por confesa a la Autoridad por no realizarla en el término señalado.

Al presentarse el primer planteamiento el Tribunal deberá analizar las cuestiones planteadas por la Autoridad, específicamente en aquellas que impidieron emitir la decisión al fondo del asunto, la ineficacia de la impugnación del actor, las pruebas, causales de improcedencia y sobreseimiento y, al igual que el actor la Autoridad demandada igual podrá señalar a algún tercero interesado si lo hubiere.

Contestada la demanda se dará paso a la fecha de audiencia, misma que ha sido señalada en el acuerdo de admisión y también se dará paso al ejercicio de alguna diligencia requerida antes de la audiencia o bien podrá presentarse la ampliación de demanda y la contestación a la misma.

1.6.2 AUDIENCIA DE LEY, DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS

La audiencia será celebrada el día y hora señalado, salvo que se haya pospuesto la audiencia por la falta de alguna acción que debió ser realizada por las partes y esta tendrá por objeto el desahogo de las pruebas ofrecidas en la demanda y en la contestación de la misma.

Estará presente en esta parte del proceso el Magistrado, Secretario de Acuerdos, las partes, tercero interesado peritos, testigos, estos últimos según sea el caso.

Las pruebas ofrecidas y admitidas serán desahogadas en la audiencia de ley, las pruebas que se admiten en el Proceso Administrativo son la confesional, testimonial, documental, inspeccional, pericial, presuncional, instrumental y medios aportados por la ciencia como la fotografía, una vez desahogadas se dará paso a oír los alegatos los cuales podrán ser presentados de manera escrita u oral en este último no podrán exceder el tiempo de 10 minutos por cada una de las partes, ya sea por ellos mismos o por conducto de sus representantes.

Lo anterior aplica a los Juicios Administrativos y Fiscales ya que el C.P.A.E.M. establece que, para los Juicios Sumarios regulados en su artículo 272 B⁹. Estos únicamente admitirán pruebas documentales y públicas, además la audiencia tendrá por objeto desahogar las pruebas admitidas y recibir los alegatos de las partes, los cuales únicamente deberán ser por escrito.

⁹Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 272 B.- Procederá el juicio en vía sumaria, siempre que se trate de los siguientes supuestos: I. Multas impuestas por infracciones de tránsito; II. Asuntos cuya cuantía sea menor a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. III. La omisión de las Autoridades a dar respuesta a las peticiones de los particulares en términos de la fracción VI del artículo 229 del presente Código; IV. Apertura de negocios o empresas de bajo impacto o riesgo.

Finalizada la etapa de alegatos la Sala dará pie al dictado de la sentencia, la cual podrá hacerse en ese momento y salvo, que deban tomarse diferentes constancias, deberá turnarse el asunto para la elaboración de la misma en un término no mayor a cinco días.

Una vez entendido el Proceso Administrativo daremos paso a la siguiente fase del juicio que es la sentencia, también se establecerá un análisis de esta.

CAPÍTULO SEGUNDO: LAS SENTENCIAS Y SUS EFECTOS

2.1 Definición de la Sentencia y la Identificación de sus Requisitos 2.2. La Declaración de Improcedencia y Sobreseimiento del Juicio 2.3 Efecto de la Sentencia Cuando se determina la Validez del Acto Impugnado 2.4 Efecto de la Sentencia Cuando se determina la Invalidez del acto impugnado 2.5 El Recurso de Revisión

Como se ha señalado con anterioridad terminada la audiencia se dará paso a la redacción de la sentencia, antes de redactar la sentencia el Magistrado y el Secretario Proyectista deberán analizar el expediente para así identificar si se llega a presentar alguna causa de improcedencia o sobreseimiento (causales que serán explicadas más adelante), en el caso de no existir tal situación se procederá a la fijación de la litis.

Elaborar una sentencia es una tarea regulada en el C.P.A.E.M. se debe hacer de manera analítica y cuidadosa tomando en cuenta cada uno de los actos llevados a cabo durante el proceso.

Como siguiente punto en esta investigación, en el desarrollo de este capítulo definiremos la sentencia, pero también los requisitos de las mismas, ya que las condenas emitidas en estas son parte del objeto de estudio en el sentido de que teniendo presente la condena se dará paso al análisis del cumplimiento de esta.

2.1 DEFINICIÓN DE LA SENTENCIA Y LA IDENTIFICACIÓN DE SUS REQUISITOS

Antes de entrar al fondo de la misma debemos entender que es una sentencia, el C.P.A.E.M. establece tres tipos de resoluciones; los acuerdos que se definen como determinaciones de trámite necesarios para el desarrollo del juicio, sentencias

interlocutorias las que ponen fin al asunto sin decidir sobre la cuestión principal y por último las sentencias las cuales son las resuelven el juicio o recurso principal y por lo tanto ponen fin al juicio.

Para Nava Salvador la sentencia constituye *“un elemento de la mayor importancia democrática en un Estado constitucional de derecho, donde todos los actos de sus integrantes y, sobre todo, de quienes integran los órganos de poder, se someten al imperio del orden normativo. En tal sentido, es precisamente la sentencia dictada por el juez garante del régimen democrático, el instrumento mediante el cual se salvaguardan los principios de certeza y seguridad jurídica, mediante la impartición de justicia con independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad.”* (Nava, 2010, pág. 53).

De lo referido, entendemos que la sentencia es un acto procesal, una resolución que pone fin a un proceso y da paso a otros medios de defensa, (en este caso recurso de revisión) y que como todo acto debe contar con una serie de requisitos, para este son de forma y de fondo los cuales definiremos a continuación.

Respecto a estos requisitos serán definidos, pero también se hará una breve cita de ellos, identificándolos con los que determina el artículo 273 del C.P.A.E.M. referente a los puntos necesarios que debe contener una sentencia dictada por una Sala Regional, esto con el fin de que exista un mejor entendimiento de la misma.

Los requisitos de fondo los limitaremos solamente a los siguientes:

La congruencia: entendida en la sentencia, nos referiremos a esta como la relación que debe existir entre lo que han solicitado las partes, cada uno en su escrito correspondiente y en lo que la Autoridad juzgadora resolverá ¹⁰. En C.P.A.E.M nos establece que en el proceso administrativo las resoluciones deben contener este requisito planteado, además de ser exhaustivas.¹¹

¹⁰ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 273 Las sentencias que dicten las salas del Tribunal deberán contener” ...” Fracc. II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;

¹¹ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 22.- Las resoluciones serán claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente del procedimiento y proceso administrativo

La exhaustividad: entenderemos que el Magistrado, en este caso de la Sala Regional, tiene por obligación examinar cada una de las pretensiones hechas por las partes, este requisito lo analizaremos más adelante porque se complementa con los requisitos de forma.

La fundamentación y motivación: ambas reconocidas en la Carta Magna por los artículos 14 y 16. Nos referiremos a la motivación de la sentencia como aquella obligación del Tribunal de expresar las razones que lo llevaron al fundamento de su resolución. En el régimen jurídico mexicano, la motivación y fundamentación de los actos no es exclusiva de los órganos judiciales, sino que se extiende a toda Autoridad. (Cipriano, 2012, pág. 331)

Por fundamentación entendemos que al dictarse la sentencia no debe actuar por simple razón, sino que su decisión debe de ser en consideración a los preceptos legales aplicables.¹²

Prácticamente los requisitos fondo de la sentencia se ven reflejados en la motivación y fundamentación del Juzgador, ambos se complementan en razón de que, el Magistrado al examinar cada una de las planteaciones de las partes, debe buscar su interpretación que mejor se acomode al asunto, siempre sustentándose en la ley, en la jurisprudencia, principios y en general, en las fuentes del derecho, pero además estos deben ser congruentes y reflejar que se la motivación que lo orilló a tomar la decisión en la condena ha sido considerando cada pretensión y defensa de las partes, así como cada acto procesal llevado a cabo.

Respecto de los requisitos de forma, lo primero es señalar que la sentencia en el sentido de un documento escrito, esta debe de realizarse de forma escrita y en idioma español, esta formalidad se encuentra regulada en el C.P.A.E.M. y es un requisito que se debe cumplir en todas las actuaciones llevadas en el proceso¹³.

¹² Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 273 Las sentencias que dicten las salas del Tribunal deberán contener Fracc. “...” V. La mención de disposiciones legales que las sustenten;

¹³ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 6.- Las promociones y actuaciones deben escribirse en lengua española. Cuando las promociones no se presenten escritas en español, se acompañarán de su correspondiente traducción; en caso de que no se exhiba ésta, la Autoridad administrativa o el Tribunal la obtendrán, de manera oficiosa, de traductor adscrito preferentemente a las dependencias públicas.

De aquí partiremos que la sentencia contará en un inicio con un proemio donde debe señalarse el nombre de las partes, numero de juicio, fecha y lugar del dictado de la sentencia. Además de tres elementos esenciales para el entendimiento de esta, los cuales son el resultando, considerando y los resolutivos, puntos en los cuales se ve identificado el razonamiento que el juzgador tomó en cuenta y lo motivaron a emitir su resolución. Con esto entendemos que se verán reflejados los requisitos de fondo que debe cumplir la sentencia.

Como primer requisito de forma tenemos el resultando, para Gómez Cipriano *“son simples consideraciones de tipo histórico descriptivo. En ellos se relatan los antecedentes de todo el asunto, refiriendo la posición de cada una de las partes, sus afirmaciones, los argumentos que ha esgrimido, así como la serie de pruebas que las partes han ofrecido y su mecánica de desenvolvimiento.”* (Gómez, 2012, pág. 329).

De esto entendemos que esta parte de la sentencia funge como un resumen de manera breve en los que se establece las principales actuaciones hechas por las partes durante las etapas del Proceso Administrativo.

Una parte importante que es en el resultando de la sentencia se deberá señalar la invalidez del acto que pretende demostrar el actor. Es importante que se señale el nombre del actor, la fecha del acto y la Autoridad competente, esto en primer lugar para tener identificada a las partes del juicio, pero también para tener identificado estos datos, para el caso de que exista alguna causal de sobreseimiento que se haya presentado desde el momento de la admisión, se haya hecho valer en la contestación o se haya actualizado durante el Juicio.

Lo siguiente es un ejemplo hipotético de cómo podemos encontrar redactado de manera general en una sentencia la invalidez que trata de hacer valer la parte actora: *La resolución dictada por una autoridad determinada, de la Entidad Federativa, en el expediente XXXX/XXXX/20XX, de fecha señalada, la cual me fue notificada en fecha indicada.*

Artículo 7.- Las promociones y actuaciones del procedimiento y proceso administrativo se presentarán o realizarán en forma escrita. Cuando una diligencia se practique de manera oral, deberá documentarse inmediatamente su desarrollo.

Continuando con los elementos del resultando, en estos también encontraremos la referencia a la contestación de la demanda y el auto de contestación, así como la audiencia de ley y lo actuado en ella. También se debe señalar si se llevó a cabo alguna diligencia durante el proceso, si se presentó alguna prueba superviniente o algún requerimiento a las partes.

Terminada la redacción del resultando se dará paso a señalar el considerando, para López Ruiz Miguel y López Olvera Miguel Alejandro se refiere a “*cada una de las razones esenciales que preceden y sirven de apoyo a un fallo o dictamen y empiezan con dicha palabra.*” (Miguel Lopez, Miguel Lopez, 2007, pág. 29).

La parte del considerando se deberá señalar si el asunto llevado ante la Sala Regional es de su competencia, de acuerdo con los lineamientos ya señalados con anterioridad (materia, grado, territorio y cuantía). Se deberán señalar las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por la Autoridad y que se resolverán en los puntos resolutivos de la sentencia.¹⁴

Como se definió con anterioridad los considerando son las razones esenciales necesarias para dictar la condena, el Magistrado y el Secretario Proyectista de la Sala Regional deberán fijar con claridad las pretensiones que el actor está reclamando, las cuales tienen como objeto demostrar la invalidez del acto y las defensas que la Autoridad expresa a fin de que en ellas pueda el juzgador determinar la validez de su acto. A esta parte del considerando se le llama fijación de la litis.

En la fijación de la litis se identificarán los conceptos de invalidez señalados por el actor en su escrito inicial de demanda, se deberá analizar cada uno de ellos salvo que solo uno sea suficiente para desvirtuar la validez del acto. El Magistrado y el Secretario Proyectista identificarán si dichos conceptos resultan fundados, además de establecer

¹⁴ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 273 Las sentencias que dicten las salas del Tribunal deberán contener Fracc. I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio que, en su caso, se adviertan de oficio o sean propuestas por las partes;

todas las defensas plateadas por la Autoridad, así como el análisis de las pruebas presentadas, admitidas y desahogadas.¹⁵

Una vez identificado cada uno de los conceptos de ambas partes se hará un análisis de fondo de los principales conceptos hechos valer por las partes y que son necesarios para el dictado de validez o invalidez del acto. Un ejemplo hipotético es lo siguiente: en una multa de tránsito impuesta a un particular, un concepto de invalidez hecho valer por el actor podría ser:

“La infracción determinada por las Autoridades viola el artículo 16 de la Constitución Federal, pues al consagrarse este precepto la garantía de fundamentación y motivación requiere que todo acto de molestia se cite a las disposiciones legales en que se apoya su facultad de la Autoridad administrativa para emitir o ejecutar dicho acto.”

Por otro lado, la defensa impuesta por la Autoridad demanda podría ser la siguiente:

“El acto impugnado en ningún momento viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el mismo fue expedido por la Autoridad competente, facultada para su emisión, expedida sin que mediara error alguno sobre objeto, fue posible y determinable, está previsto por los ordenamientos jurídicos aplicables de la materia”

Por lo tanto, corresponde a la Sala Juzgadora identificar si la boleta de infracción fue debidamente fundada y motivada al momento de su emisión, además de que, con lo

¹⁵ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 273 Las sentencias que dicten las salas del Tribunal deberán contener Fracc.” ...” III. El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición general impugnada, debiendo analizarse en primer lugar las cuestiones dirigidas al fondo del asunto;” IV. El examen y valoración de las pruebas;

determinado, no se haya violentado lo establecido en el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fijada la litis y hecho el análisis de fondo se procederá a redactar los puntos resolutivos, en donde se debe dictar los efectos del fallo y la condena respectiva, en ella deberá declarar el sobreseimiento del juicio, la validez o invalidez del acto impugnado, según sea el caso.

A continuación, desglosaremos cada una de las condenas posibles que se pueden determinar en una sentencia administrativa (para este caso solo nos enfocaremos en resoluciones que condenen actos administrativos o fiscales y no centrándonos en disposiciones de carácter general.).

2.2 LA DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO

Las causales de improcedencia se pueden determinar a través de acuerdos, aunque la ley nos establece que para este punto debe existir un análisis a fondo en el contenido de la sentencia y en su caso se debe dar la declaratoria de sobreseimiento del juicio en los puntos resolutivos según sea el caso.

Ezquerria Sergio define a la improcedencia, en materia procesal *“como la imposibilidad de que el ejercicio de acción logre su objetivo”*, es decir: que ante la aplicación del derecho existe un impedimento legal o material para que el Órgano Jurisdiccional analice y falle respecto al asunto que se plantea. (Ezquerria, 2010, pág. 1)

Y es que, tomando en consideración lo anterior entenderemos las causas por las cuales se considera que un Juicio Administrativo, Fiscal o Sumario llevado ante las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa resulta improcedente, pues el artículo 267 del C.P.A.E.M. (referido exclusivamente a las causales de improcedencia), establece que el juicio no puede ser procedente contra actos o disposiciones que no sean de su competencia, esto es que, de acuerdo con los términos de competencia anteriormente planteados, las Salas Regionales no pueden conocer sobre actos de

Autoridades Federales, actos en Materia Electoral o actos o disposiciones del propio Tribunal.

En el caso de que un juicio se haya impugnado actos o disposiciones en diversos procesos judiciales o cuando dicha impugnación no afecte los intereses del actor, que pretenda defender un derecho que no le afecta, el proceso se declarará improcedente.

Cuando el actor reconozca expresamente mediante una manifestación escrita el acto o disposición, no hizo valer su derecho en los plazos señalados por la ley y también cuando este acto o disposición no exista, haya dejado de existir o se hayan cesado los efectos del mismo, se considerará improcedente el acto.

Estas causales de improcedencia podrán ser declaradas a través de acuerdos y se transfieren al sentido de resolución de una sentencia cuando apareciera alguna de estas cuestiones durante el juicio.

Por causal de sobreseimiento entenderemos que *“es una figura procesal que al presentarse dentro del trámite de un proceso ocasiona la terminación anormal del mismo, y sin que el juzgador se hay pronunciado respecto de la procedencia de la acción que se haya hecho valer por la parte actora.”* (Zavala, 2001, pág. 23) Es decir, la declaración de sobreseimiento pondrá fin al asunto sin dictar una condena sobre el fondo del mismo.

EL artículo 268 del C.P.A.E.M determina como causales de sobreseimiento lo siguiente:

El desistimiento del actor, si durante el juicio se llegarán a presentar alguna de las causales previstas en el artículo 267, cuando se haya dado la muerte del actor o que la Autoridad haya dado por satisfecho las pretensiones planteadas por el actor, la Sala igual deberá resolver sobreseimiento del juicio, cuestiones que como se ha mencionado pueden ser hechas valer desde la contestación de la demanda o presentarse o actualizarse durante el juicio.

Las causales de improcedencia y sobreseimiento darán por terminado el asunto sin resolver el fondo del mismo, estas causales son echas valer únicamente por la parte demandada, pero dependiendo de las actuaciones de las partes, así como los

documentos que exhiban durante el proceso, se puede llegar a sobreseer el asunto, en el sentido de que se no se conocían, pero fueron actualizadas. La condena que resuelva lo anterior recaerá en un resultado de “sobreseimiento del juicio.”

2.3 EFECTO DE LA SENTENCIA CUANDO SE DETERMINA LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO

En cumplimiento del artículo 273 del Código Adjetivo señalado, el Magistrado tiene la obligación de dar por terminada la Contienda Administrativa que existe entre el particular y la Autoridad, la manera en la que se da por terminado el asunto resolviendo el problema de fondo es a través de la sentencia, a continuación estableceremos la condena en donde se declara validez del acto impugnado, es decir que el juzgador no encuentra algún error en la ejecución del Acto Administrativo y por los conceptos de invalidez del actor y las pruebas ofrecidas no fueron suficientes para desvirtuar el acto o este fue ejecutado en términos de ley.

En este sentido, el dictar una condena en donde se declare su validez del acto administrativo, significa que la Autoridad no emana ningún error u omite algún requisito del mismo en su emisión y por lo tanto no afecta los intereses del particular, así que esta condena recae sobre el actor y no sobre la Autoridad.

El Código Administrativo del Estado de México en su artículo 1.8, establece una serie de requisitos del Acto Administrativo para que así se haga efectiva su validez, a continuación, los mencionaremos, clasificándolos en tres grupos, elementos subjetivos, objetivos y formales.

Por elementos subjetivos entenderemos a aquellos requisitos que determinan que el Acto Administrativo solo puede nacer de la Administración Pública y los cuales encontraremos en las siguientes fracciones del artículo citado.

I. Ser expedido por Autoridad competente y, en caso de que se trate de órgano colegiado, se deberá cumplir con las formalidades previstas al efecto en el ordenamiento que lo faculta para emitirlo;

II. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o fin del acto;

III. Ser expedido sin que existan dolo ni violencia en su emisión;

IV. Que su objeto sea posible de hecho, determinado o determinable y esté previsto en el ordenamiento que resulte aplicable;

V. Cumplir con la finalidad de interés público señalada en el ordenamiento que resulte aplicable, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;

VI. Constar por escrito o de manera electrónica indicando la Autoridad de la que emane y contener la firma autógrafa, electrónica avanzada o el sello electrónico en su caso del servidor público;”

Estos elementos determinan que el Acto Administrativo es reconocido como tal debido a que, su naturaleza proviene de un ente público, pero este además tiene por objeto crear, transmitir o extinguir una situación jurídica concreta, por lo tanto, es importante que dentro del mismo o en su emisión no exista algún vicio que afecte los intereses de los particulares.

Para el caso de los elementos objetivos, Serra Rojas Andrés los define como *“la declaración de voluntad contenida en el acto, el motivo, es decir la razón de ser del acto y la finalidad, o sea el propósito de interés público.”* (Serra, 2003, pág. 256). Estos elementos se verán reflejados en las siguientes fracciones del artículo.

“VII. Tratándose de un acto administrativo de molestia, estar fundado y motivado, señalando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias generales o especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo constar en el propio acto administrativo la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso concreto;

VIII. Expedirse de conformidad con los principios, normas e instituciones jurídicas que establezcan las disposiciones aplicables;”

Como se ha señalado este tiene por objeto una determinada situación jurídica, por lo tanto, su fundamentación y motivación del Acto deben estar reflejados en el mismo, siempre respetando las normas, principios e instituciones del derecho.

Por último, los elementos formales o de expresión externa del acto, que se integra con el Procedimiento, la forma de la declaración y la notificación. (Serra, 2003, pág. 256). Estos elementos se verán reflejados en las siguientes fracciones del artículo:

“IX. Guardar congruencia en su contenido y, en su caso, con lo solicitado;

X. Señalar el lugar y la fecha de su emisión, así como los datos relativos a la identificación precisa del expediente, documentos, nombre y domicilio físico o correo electrónico de las personas de que se trate;

XI. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, se hará mención expresa de la dependencia emisora, la oficina en la que se encuentra dicho expediente o el portal electrónico a través del cual puede realizar la consulta del expediente respectivo;

XII. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, deberá hacerse mención del derecho y plazo que tienen para promover el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

XIII. Resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos en las disposiciones aplicables.”

Con estas clasificaciones del Acto Administrativo, es más factible tener presente las defensas que la Autoridad puede hacer valer en contra de los conceptos de invalidez de la parte actora, los cuales tienen por objeto determinar la inexistencia o algún vicio o error en uno o algunos de sus elementos, o en el caso de que el Acto no afecte los intereses del particular, aun cuando el mismo cuente con algún vicio o falta en su emisión o ejecución se podrá determinar la causal de sobreseimiento en el juicio.

2.4 EFECTO DE LA SENTENCIA CUANDO SE DETERMINA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO

Cuando una sentencia resuelve la invalidez del acto impugnado, se refiere a que el Magistrado de la Sala Regional una vez que haya analizado cada una de las cuestiones planteadas por las partes, determina que el acto emitido por la Autoridad Administrativa no puede determinarse valido debido a ciertas violaciones legales que se han cometido.

Al resolverse en la sentencia la invalidez del acto, el Magistrado deberá señalar en la misma a la Autoridad que se condena, que condena debe cumplir, como por ejemplo devolución de algún dinero, reposición del procedimiento, emisión de un nuevo acto, etc.

La invalidez del acto impugnado la cual resolverá la Autoridad competente, en este caso el Magistrado de la Sala Regional, este efecto de la condena en la sentencia es el punto central de esta investigación, ya que la serie de etapas específicas antes planteadas nos dirigen a este punto, el cual forma un elemento esencial para la investigación y es la condena que recae sobre la Autoridad, por lo tanto las etapas siguientes darán como resultado una serie de resultados de las cuales destacaremos el incumplimiento de la sentencia por ser la que se aproxima a unos de los objetivos de este trabajo.

Es por eso que definiremos a continuación las razones por las cuales la ley determina que un Acto o resolución emitido por una Autoridad Administrativa se debe declarar la invalidez de este. En este sentido analizaremos las causas reconocidas en las leyes competentes de la materia, en primer lugar, la ley sustantiva y en segundo lugar la ley adjetiva.

Referente a la invalidez, el artículo 1.11 del Código Administrativo del Estado de México nos establece que un Acto Administrativo es invalido cuando no cumpla con los requisitos del artículo 1.8 de la misma ley, en este caso y solo a manera de cita nos referimos a los ya analizados, los cuales fueron clasificados de manera subjetiva, objetiva y formal. De igual forma será declarada su invalidez cuando se incurra en

arbitrariedad, desigualdad y cualquier causa similar o derive de un procedimiento con vicios y en caso de que se demuestre esto, se deberá ordenar la reposición del procedimiento, según la etapa en donde se incurrió el vicio.

Ahora el artículo 274 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, regula más causas por las que un acto puede ser declarado invalido, (además de las ya mencionadas), las siguientes:

Incompetencia de la Autoridad: como ya se ha señalado algunas cuestiones de competencia, la Autoridad que emita un acto también debe estar sujeta a la misma y una de las planteaciones que establece esta ley es que la Autoridad pueda fungir como ordenadora y ejecutora en el acto que se ordene, dicte, ejecute o trate de ejecutar.

Omisión de requisitos: simplemente a manera de cita y entendimiento de lo que esta ley reconoce como invalidez del acto, son los que ya hemos mencionado y los cuales afecten intereses de los particulares.

Como tercera causa el Código establece vicios que se den en el procedimiento, como se ha señalado para que un acto sea reconocido valido debe evitar el error, dolo o violencia tanto en su causa, emisión y fin, o que dentro de un procedimiento no se presenten ninguno de estos vicios pues en caso contrario afectarían los intereses y defensas de los particulares y se dará como resultado la determinación de su invalidez.

Para la siguiente causa hay que recordar que los requisitos del Acto Administrativo establecen que este debe tener un objeto sea posible de hecho, determinado o determinable y esté previsto en ordenamiento que resulte aplicable, así como cumplir con la finalidad de interés público sin que se busque algún otro fin que no sea el que el ordenamiento determine, para el caso de que en lo establecido, en el acto emitido se actúe de manera contraria, es decir, que los hechos que lo motivaron fueron distintos o en el caso de haber sido dictado en desobediencia de las disposiciones que lo motivaron se determinará su invalidez.

Cuando en un Acto Administrativo se dé un vicio en donde la Autoridad utilice el poder que le otorga la Administración Pública, genere cuestiones distintas a lo reconocido y permitido por el mismo, se dará la figura de desvío de poder, también si dentro de ese

Acto se actúa con desigualdad, arbitrariedad, fracturando los principios del Derecho Administrativo reconocidos en la ley, se deberá determinar la invalidez del acto.

Por último, esta ley establece que cuando en el Acto Administrativo actúe en contra de los Derechos Humanos reconocidos en la Carta Magna, Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México o en contra de sus disposiciones o leyes que emanen de estas, se deberá reconocer la invalidez del mismo.

La invalidez del Acto tiene por objeto proteger al gobernado en contra de los Actos que emanan de la Administración Pública Estatal o Municipal, esta invalidez será de acuerdo a los conceptos que el particular señaló en su escrito inicial de demanda y como consecuencia se deberá condenar a la reposición del procedimiento administrativo, invalidez del acto, devolución de una cantidad de dinero o el pago de daños y perjuicios.

Las condenas que se señalen en la sentencia podrán ser impugnadas por medio del Recurso de Revisión, el cual se lleva a cabo ante la Sala Superior del Tribunal, por medio de alguna de sus Secciones.

2.5 EL RECURSO DE REVISIÓN

Ante las resoluciones de Tribunal podrá interponerse el Recurso de Revisión del Proceso Administrativo, a continuación, lo definiremos de manera breve centrándonos solamente cuando es en contra de la sentencia que emita la Sala Regional puesto que, este recurso en términos del artículo 285 del C.P.A.E.M es procedente contra las sentencias que emitan las Salas Regionales, pero también expresa diferentes consideraciones para su interposición.¹⁶

¹⁶ Interposición del Recurso de Revisión, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Artículo 285.- Procede el recurso de revisión en contra de: I. Los acuerdos que desechen la demanda; II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; IV. Las sentencias que decidan la cuestión planteada, por violaciones cometidas en ellas o

Puede interponerse por cualquiera de las partes, dentro del plazo de ocho días siguientes al en que surta efectos la notificación de la sentencia, este se presenta ante la Sección de la Sala Superior correspondiente a la Sala Regional, este contará con un folio, número de expedientes, las partes, tercero interesado, fecha de inicio, el tipo de resolución y fecha de terminación.

El Magistrado designado para el Recurso formará el proyecto de resolución junto al Secretario Proyectista el cual será analizado por los Magistrados integrantes de la Sección y se aprobará por unanimidad de votos o mayoría de votos. La resolución del Recurso podrá producir dos efectos la confirmación de la sentencia emitida por la Sala Regional o la modificación de esta, en términos que la misma sección señale.

durante el procedimiento del juicio, en este último caso cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trascienden al sentido de las sentencias; y V. Las resoluciones que se emitan en el juicio sumario; VI. Las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia;

CAPÍTULO TERCERO: CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

3.1 El Cause Ejecutoria de una Sentencia en el Proceso Administrativo 3.2 La Comunicación de la Sentencia Cuando Cause Ejecutoria 3.3 Fase de Cumplimiento de la sentencia 3.4 Destitución de Servidor Público por Sala Superior como Resultado de Incumplimiento a la Sentencia

Antes de dar paso a la definición del cumplimiento de sentencia y todos los aspectos que conlleva señalaremos unos datos importantes respecto al cumplimiento de las ejecutorias, esto con el fin de tener presentes a través de datos numéricos como el incumplimiento es una falta real que se presenta en todas las Salas y no es problemática de solo una, además así precisar cómo afecta al alcance total de la Justicia Administrativa.

Respecto a la fase de cumplimiento de sentencia y con base a una investigación dentro de las Salas del Tribunal y rectificando la información obtenida, de quinientos juicios que pueden ingresar al año, tomando esta como una medida general a cada una de las Salas de jurisdicción ordinaria, es decir de la primera a la séptima Sala Regional, mensualmente podemos identificar un cumplimiento de sentencia por mes de 9 (nueve) juicios, agotando cada una de las etapas anteriormente, es decir desde la presentación de la demanda hasta el archivo del mismo.

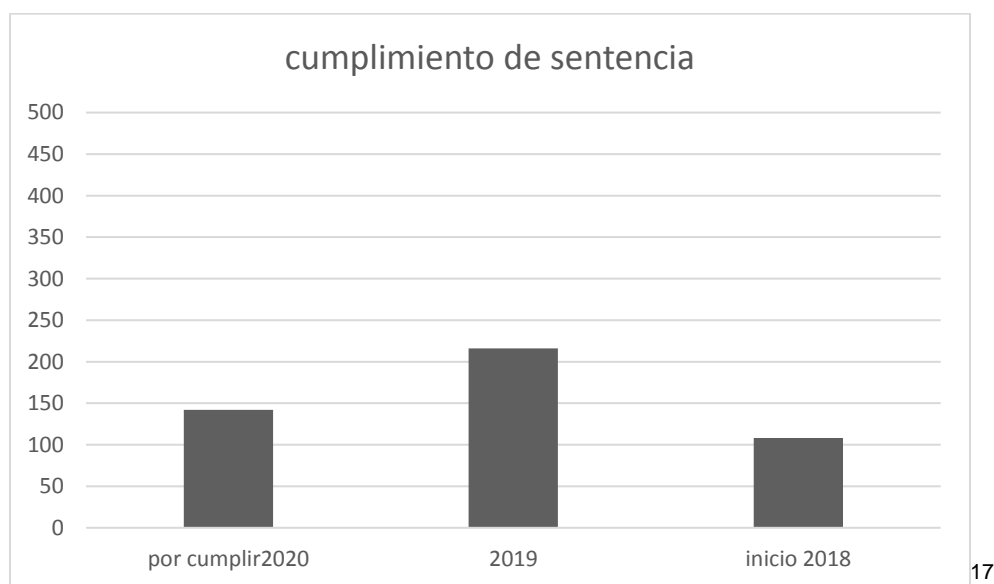
Por lo tanto, tenemos que:

De una Sala Regional donde al año se reciban mínimo 500 (quinientos) juicios en vía sumaria u ordinaria (Administrativo o Fiscal), al año se tiene el cumplimiento aproximado de 108 asuntos resueltos.

Haciendo un caso hipotético que en el año de 2018 se hayan recibido 500 (quinientos) asuntos desde el mes de enero al mes de diciembre, solo 108 (ciento ocho) asuntos son archivados como total y definitivamente concluidos, más los asuntos del año

pasado (2017), cuya media de cumplimiento es un aproximado al doble de los resueltos en el 2018, es decir entre 216 (doscientos dieciséis) a 250 (doscientos cincuenta) juicios, por lo tanto, una sola Sala Regional en un año puede llegar a resolver entre 350 (trescientos cincuenta) a 500 (quinientos) asuntos, si tomamos en cuenta los juicios de años anteriores (2016, 2015, 2014 etc.).

Para el año 2019 de los juicios del año pasado que restaban por resolver son 392 (trescientos noventa y dos) por lo tanto, si seguimos la regla de la media aplicable, para diciembre de 2019 los asuntos resueltos totales de 2018 serían 358 (trescientos cincuenta y ocho), arrastrando el cumplimiento para el 2020 de 142 (ciento cuarenta y dos) asuntos, como podemos identificarlo en la siguiente gráfica.



Ahora, con esto podemos observar que el cumplimiento más fuerte a los juicios es al año siguiente de su procedencia, esto debido al desarrollo de las etapas y la atención al cumplimiento por parte de las autoridades.

Otro punto importante es que respecto a la gráfica en el total de juicios cumplidos hasta 2019 es decir 358 (trescientos cincuenta y ocho) un aproximado, 104 (ciento cuatro) son cumplimientos puros, es decir no fue necesario la aplicación de una multa, no

¹⁷ Realizado por el autor del trabajo para los fines didácticos del mismo. Fuente: investigación y práctica ante el Secretario de acuerdos para llevar a cabo funciones de Magistrado de la Sexta Sala Regional del Tribunal.

agotaron ninguna etapa del cumplimiento de sentencia o no se presentó defecto en la ejecución de sentencia.

Ahora los juicios restantes, es decir los que dicen por cumplir, se encuentran en fase de incumplimiento, muchos de ellos están por agotar todas las fases del cumplimiento de sentencia es decir entrar al supuesto que planteamos.

Una cuestión importante por señalar es que las autoridades con más cumplimientos a las sentencias son las Autoridades Municipales a diferencia de las Autoridades Estatales.

Ahora si lo aterrizamos este planteamiento general al nivel general de las Salas, es decir las siete Salas de jurisdicción ordinaria tendríamos:

De las siete Salas Regionales un total de 3,500 asuntos aproximadamente.

Siguiendo la regla de que al mes se tiene el cumplimiento ahora tomando como base quince juicios archivados, (ya que hay Salas con más personal o cuya estructura permite mejor el desarrollo de las etapas de Contencioso). Tenemos que:

De 15 juicios multiplicándolo por 12 meses es igual a 180 (ciento ochenta) y esto lo elevamos a las siete Salas regionales, tenemos 1260 (mil doscientos sesenta) juicios archivados como total y definitivamente concluidos, esto obviamente más los resueltos de los años anteriores y cuyos restantes serán resueltos al próximo año.

Entendiendo estos puntos respecto al total de cumplimiento y una vez analizada las características de las sentencias así como sus posibles condenas es momento de definir la fase de su cumplimiento y como de este capitulado damos pie al origen de la problemática del incumplimiento de las sentencias por parte de las Autoridades, pues este apartado merece un análisis de fondo en el sentido de que la información obtenida así como el análisis de la misma dará pie a la redacción del capítulo siguiente y con ello poder obtener una posible solución o recomendación al problema antes planteado.

Determinaremos la ejecutoria de una sentencia para así dar paso a la tarea del Tribunal en dar comunicación a la misma y posteriormente los posibles resultados que se pueden dar en respuesta a la misma.

3.1 EL CAUSE EJECUTORIA DE UNA SENTENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Notificada la sentencia a las partes (que la ley determina que debe ser de manera personal a la parte actora y por oficio a la Autoridad), podrán interponer el recurso legal correspondiente, siempre que lo hagan en el tiempo establecido. Para el caso contrario en que las partes no opten por este derecho, se tendrá la cosa juzgada.

“La cosa juzgada se produce cuando una sentencia definitiva se convierte en firme, esto es, que no existen medios para poder impugnarla o bien transcurrió el plazo para instarlos.” (Ferrer y Sánchez, 2009, pág. 241).

Esto es que la cosa juzgada nacerá de una sentencia dictada durante el proceso dando la seguridad y certeza jurídica correspondiente, en donde se ha concluido con todas las instancias y además se llevaron a cabo las formalidades de ley, pero que además las partes no hacen valer recurso alguno contra la misma o son consentidas expresamente por las mismas.

Entendido esto y teniendo ya la cosa juzgada de la sentencia administrativa, podemos dar paso a su ejecutoria, el C.P.A.E.M determina que en el pronto actuar de las Salas Regionales del Tribunal, esto para el caso de dictar sus sentencias en los términos establecidos por la ley, se tendrán por causa ejecutoria las siguientes:

I Las que no admiten recurso alguno: esto es que por ningún recurso se puede cambiar lo determinado por el Tribunal.

II Las que admitiendo recurso no se hiciera valer en los términos legales, como por ejemplo el recurso de revisión debe interponerse en un plazo de 8 días siguientes en que surta efectos la notificación de la sentencia. O bien que dentro del recurso se haya

sobreseído o confirmado por parte de Sala Superior la sentencia de la Sala Regional, que como ya se había señalado con anterioridad, este caso da paso a continuar con las etapas del Proceso Administrativo, esto es que la Sala debe continuar con el cumplimiento de la sentencia.

III Las que admitan de manera expresa las partes o sus representantes, esto se presenta cuando las partes manifiesten la aceptación de lo declarado en la sentencia, mediante un acto declarativo de voluntad o de igual manera de forma escrita.¹⁸

Una vez que la sentencia ha causado ejecutoria se dará paso a la siguiente etapa, comunicar a las partes lo conducente.

3.2 LA COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA CUANDO CAUSE EJECUTORIA

Esta fase procesal es de vital importancia para el cumplimiento de la sentencia debido a que, de ella depende que las partes (el actor y la Autoridad) se tengan por comunicado que el tiempo para interponer algún recurso a terminado y por ende la sentencia estará en vías de cumplimiento.

Para el caso de esta investigación, una vez determinada la ejecutoria de la sentencia se deberá comunicar para que la parte condenada de paso a su cumplimiento, para este trabajo nos enfocaremos solamente al caso de cuando las condenas recaen sobre la Autoridad (invalidez del acto). El C.P.A.E.M. determina que cuando la sentencia es favorable al actor la Sala Regional tiene la tarea de comunicar a la Autoridad demandada, por medio de un acuerdo y de manera pronta el acuerdo que determine lo antes mencionado.

A través de un oficio se le debe notificar a la autoridad el acuerdo respectivo de cause ejecutoria, el cual debe cumplir con una serie de formalidades, las cuales en términos generales son: el número de oficio, fecha, Autoridad, el señalamiento de que se está

¹⁸Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 278 del cause ejecutoria de las sentencias.

comunicando la sentencia, la fundamentación de la notificación, la prevención para que informe el cumplimiento y por último el nombre y firma del Actuario o secretaria o Secretario de Acuerdos, esto último en los términos que la ley lo permita.

Por último, la ley determina que dentro de tres días siguientes en que surta efectos la notificación, la Autoridad debe rendir informe sobre el cumplimiento de la sentencia o las vías y medidas que está tomando para su cumplimiento, o para el caso de que la naturaleza del asunto no permita dar cumplimiento en los tres días concedidos, se podrá ampliar el término hasta por diez días, que empiezan a correr de acuerdo con las formalidades de los efectos de las notificaciones.

Si la Autoridad no ha dado cumplimiento en el término concedido se pasará a tomar medidas para que este acate lo ordenado.

3.3 FASE DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

Como consecuencia de la comunicación de la sentencia se desarrollarán dos posibles resultados, el cumplimiento e incumplimiento. A continuación, definiremos brevemente el cumplimiento esto para tener presente como las Salas Regionales pueden dar por terminado el Proceso Administrativo y además las circunstancias en las que se presenta la fase de incumplimiento de sentencia.

El acuerdo emitido por la Sala Regional en donde se determine el cause ejecutoria y por lo tanto el señalamiento del cumplimiento a la sentencia, la cual deberá hacerse en un plazo de tres días hábiles.

Realizada la debida notificación la Autoridad deberá dar cumplimiento a lo condenado por la Sala Regional, informando a la misma y la parte actora el modo en el que efectuó la condena respectiva.

Teniendo el informe de cumplimiento del demandado, el particular manifestará la satisfacción en el modo que se dio por cumplida la condena, en este sentido entenderemos por lo tanto la Sala determinará tener por cumplida la sentencia definitiva que recayó en el asunto y por lo tanto dará paso a ordenar el archivo del mismo como total y definitivamente concluido, siendo esta una de las formas en que

se puede determinar el archivo del Juicio Contencioso Administrativo, la otra forma que la ley permite es que opere la caducidad del cumplimiento de sentencia que de acuerdo al artículo 283 del C.P.A.E.M. es cuando no se han realizado promociones en un término de seis meses.

En el sentido de que si la parte actora manifiesta estar satisfecha con el cumplimiento de la sentencia aun cuando esta no haya sido en términos de lo dictado, la Sala Regional dará por finalizado el asunto por el simple hecho de que el actor manifieste tener por satisfecho sus pretensiones.

Definida la fase de cumplimiento es momento de señalar el segundo posible resultado de la comunicación de sentencia, el cual es el incumplimiento de la sentencia.

Retomando el paso de la ejecutoria de la sentencia, y una vez practicada la notificación a la Autoridad de la misma, esta tendrá como término tres días a partir de en qué surta efectos la notificación para que dé por cumplida la sentencia o para que esta se encuentre en vías de cumplimiento.

En el caso de que la Autoridad no manifieste sobre el cumplimiento o vías de cumplimiento, la Sala deberá emitir una vista al demandado, esta puede ser de manera oficiosa o a petición de la parte actora, esta vista permitirá que el demandado manifieste lo que a su derecho convenga, esto en lo determinado por las hipótesis del surgimiento de la vista. La parte actora podrá manifestar que se realice la misma a la parte demandada cuando se presente defecto o exceso en la ejecución de la sentencia o se repita el acto impugnado, los cuales definiremos a continuación.

Defecto o exceso en la ejecución de la sentencia: para este caso nos apoyaremos en la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que establece lo siguiente:

“EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO. EXCESO O DEFECTO.

...

Hay exceso de ejecución cuando la Autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección Federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional

...

Hay defecto de ejecución cuando la Autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo.”¹⁹

En este sentido entenderemos entonces que el defecto de la sentencia en Materia Administrativa se refiere a que en los alcances del cumplimiento y lo ordenado por la sentencia, la Autoridad condenada emite un cumplimiento menor al que se le condenó y por parte del exceso la Autoridad dentro de lo condenado decide hacer un cumplimiento que va más allá de lo condenado por la Sala Regional y de ser posible puede dar resultado a la siguiente planteamiento que puede argumentar el actor, y es que se esté repitiendo el acto impugnado.

Se ha repetido el mismo acto: el actor podrá manifestar ante el modo que la Autoridad dio por cumplida la sentencia y bajo qué circunstancias contempla que se esté repitiendo el acto que impugnó durante el proceso, un ejemplo de esto es una negativa ficta, la Autoridad no da respuesta a una petición realizada por un particular y este con su silencio genera una afectación y en el caso de que la condena recaiga en dar una respuesta debidamente fundada y motivada, la Autoridad es omisa en algunos requisitos para dar respuesta al peticionario, se podría argumentar que el acto se está repitiendo puesto que, la Autoridad demandada no ha resuelto de manera correcta los intereses del actor.

Formulada esta vista la Sala determinará si el demandado no ha estado inmerso en alguna de las tres hipótesis antes mencionadas dado que, de lo contrario se le

¹⁹ Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, consultable en la página 161, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO. EXCESO O DEFECTO. La forma correcta de ejecutar un fallo constitucional que protege es dictar nueva sentencia que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor exacto de ese fallo. Hay exceso de ejecución cuando la Autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido. Hay defecto de ejecución cuando la Autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada, y tanto cuando hay exceso como defecto, procede la queja y no un nuevo amparo.

requerirá nuevamente en un término de tres días para que emita su cumplimiento y en caso de renuencia se le impondrá una multa de equivalente a 100 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (de aquí en adelante U.M.A.)

Para entender mejor la manera de la imposición de la multa, pongamos un ejemplo hipotético, un actor de nombre José Roa demanda ante la Sala Regional Competente la invalidez de una boleta de infracción y por lo tanto la devolución de la cantidad de la misma, con lo mencionado, tendremos como Autoridades demandadas al Tesorero Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito y Agente: de Tránsito todas estas Autoridades están anexas a algún Ayuntamiento dentro de los límites del Estado de México y para este caso supongamos que se encuentran dentro del territorio del Municipio de Atizapán de Zaragoza.

La razón de poner todas estas Autoridades es que en primer momento pareciera que cada una de ellas tiene un papel tanto ordenador como ejecutor pues recordemos nuestro acto impugnado y de ahí entenderemos la función de cada Autoridad. Aun cuando cada una deberá ser notificada para contestar la demanda, la Sala Regional al hacer el análisis de los conceptos de invalidez del actor y las defensas de la Autoridad, dentro del análisis de la sentencia deberá observar y determinar cada una de estas y de esta manera determinará cuales son eficaces para desvirtuar la validez del acto y cuáles no.

La Sala en la sentencia durante la elaboración del considerando, deberá determinar la causal de sobreseimiento para el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pues hecho el análisis de las actuaciones hechas valer por las partes se debe determinar que los actos impugnados esta Autoridad no funge como ordenadora o ejecutora. Por lo tanto, esta Autoridad no tiene el carácter de demandada en el asunto y como resultado se presenta la causal de improcedencia establecida en el C.P.A.E.M. en el artículo 267 fracción VII que determina:

“VII. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto o la disposición general reclamado.”

Y respecto a la improcedencia y el artículo 268 fracción II:

“Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior...”

Por lo tanto, la disposición legal que determina es la referente a la parte demanda que el C.P.A.E.M. regula en su artículo 230.

Por lo tanto, la posible condena versará en lo siguiente: primero se determinará la invalidez de la boleta de infracción ejecutada por la Agente de tránsito, así que, se condenará a Tesorería Municipal a que devuelva el pago que fue efectuado por la parte actora por concepto de la multa de tránsito.

Notificada la sentencia y teniendo la ejecutoria de esta, se notificará a la Autoridad para que, en tres días de cumplimiento de la misma, transcurrido ese plazo y dentro del caso hipotético José Roa (el actor) dará aviso a la Sala Regional para que esta de vista a la Autoridad demanda sobre el estado del cumplimiento de la sentencia.

Una vez realizada la vista, Tesorería Municipal manifestará lo que a su derecho convenga y efectuada la contestación, la Sala Regional determinará si se ha dado exceso o defecto en la ejecución de la sentencia o si está repitiendo el acto, por lo tanto se le requerirá de nueva cuenta para que cumpla con lo establecido en un término de tres días, con un apercibimiento legal de que en caso de no dar cumplimiento se impondrá una multa de 100 a 1000 veces el valor diario de la U.M.A. y suponiendo que pasado los tres días hábiles, Tesorería Municipal aun no devuelve el dinero a José Roa la Sala Regional dará paso a la imposición de la multa por medio de un acuerdo, el cual en términos generales versará en lo siguiente:

En primer lugar, la Sala Regional debe señalar que la Autoridad a desahogado el requerimiento del cumplimiento de sentencia, que en este caso recayó en Tesorería Municipal, sin embargo, se advierte que esta ha sido omisa en dar el cumplimiento, narrando la condena que recayó a favor del actor y que a pesar que la Autoridad ha manifestado dar cumplimiento a la misma el actor considera lo contrario o simplemente no ha manifestado su cumplimiento o vías de cumplimiento, la Sala deberá analizar las cuestiones del actor y de la Autoridad. Por lo tanto, en el mismo acuerdo se

identifica la ejecutoria de la sentencia, los requerimientos de la Sala Regional, así como el apercibimiento de la multa.

La Sala determinará las advertencias antes mencionadas y que a pesar de que todos aquellos actos fueron notificados a la parte demandada, se presenta en el asunto un incumplimiento de lo determinado por el Órgano Jurisdiccional, teniendo como resultado una omisión por la Autoridad Demandada. Por lo tanto, la Sala hará efectiva el apercibimiento que le fue señalado a la parte, como resultado ahora no solo la Autoridad debe avisar a la Sala del cumplimiento de la sentencia, sino que también debe de pagar la multa efectiva que se presenta con el valor de 100 veces el valor diario de la U.M.A.

En consecuencia, el valor de una U.M.A. al día de la elaboración de este capítulo equivale a la cantidad de \$86.88 (ochenta y seis 88/100 M.N.), establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero del año 2020, vigente a partir del día siguiente de su publicación, esto es que de acuerdo a la multa de 100 veces el valor diario de la U.M.A., haciendo la multiplicación equivale a \$8,688 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos. 00/100 M.N.) y esto es la primera multa determinada por la Sala, pues de acuerdo con la ley si la Autoridad continua con el incumplimiento de la sentencia, la multa impuesta podrá ir aumentando, esto quiere decir que tan solo con dos omisiones por parte de la Autoridad, la cantidad de la UMA será equivalente a doscientos, por lo tanto, haciendo la respectiva operación matemática la multa tendrá un equivalente de \$17,376.00 (diecisiete mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). mismos que la Autoridad deberá pagar en un plazo de diez días hábiles en que surta efectos la notificación del acuerdo.

Para la determinación de la multa no solo se debe tomar en cuenta los datos anteriores, sino que también el salario percibido por la Autoridad, de ahí se determinará la aplicación de la multa, esta información deberá ser solicitada por parte de la Sala Regional hacia la Autoridad demanda y si no existe apoyo por parte de este último podrán apoyarse en los tabuladores de sueldos de los Servidores Públicos de mandos superiores, mandos medios de estructura, de enlace y apoyo técnico, y generales y de

confianza del sector central del Poder Ejecutivo Estatal, según sea el caso y así determinando un salario menor y mayor de lo cual servirá para establecer el monto mínimo o máximo de aplicación de la multa y que en términos del artículo 230 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se podrá proceder al Procedimiento Administrativo de Ejecución para el cobro del mismo.²⁰

Evidentemente para el caso omiso del cumplimiento de la Autoridad, no es la única medida que la ley determina dado que, la sección de Sala Superior del Tribunal a instancia de la Sala Regional podrá solicitar al titular de la Autoridad, sea Municipal Estatal o un Organismo Auxiliar de carácter Estatal o Municipal para que este requiera a su subordinado el cumplimiento de la misma, en caso de que no exista subordinación se requerirá a la misma Autoridad.

Entendida la medida que ejecutada por el Tribunal con relación al incumplimiento de la sentencia y desagotada cada una de ellas, el Tribunal podrá determinar la destitución del Servidor Público.

3.4 LA DESTITUCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR LAS SECCIONES DE SALA SUPERIOR COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS

Hasta este momento haremos un breve recorrido de los puntos más importantes de los capítulos anteriores y de esta manera entender la continuidad del apartado de este capítulo, pero también de la investigación de los próximos capítulos.

Primero tenemos al Tribunal que, a través de sus Salas Regionales llevará a cabo el Proceso Administrativo con el objeto de resolver las controversias que se susciten entre los particulares y el Poder Ejecutivo Estatal, de los Municipios y Organismos

²⁰ Código Financiero del Estado de México y Municipios Artículo 30.- La Falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo fijado por este Código, dará lugar a que sea exigible mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Auxiliares de carácter Estatal y Municipal y que estas a su vez fungen como primera instancia.

Ahora no todas las procedencias del Juicio Contencioso Administrativo nos ayudarán a la investigación de esta problemática ya que, de manera específica se necesita abordar en los supuestos siguientes:

Debe actuar el particular como actor y la Autoridad como demandado, no es tema de esta investigación el caso en que la Autoridad funja como demandante y el particular sea el demandado.

Llevada las etapas del juicio tendremos una sentencia la cual resolverá el fondo del asunto.

La condena que determina el Magistrado de la Sala es importante en virtud de que, nos enfocamos en sentencias condenatorias a las Autoridades, pero no para los particulares ni donde se determine la improcedencia y Sobreseimiento del asunto, pero es importante conocer estas tres condenas para entender por qué solo una puede apoyar esta investigación.

Lo anterior se centrará en la causa ejecutoria de la sentencia, es decir que nos enfocaremos en las que no admiten recurso alguno o en aquellas en donde no se hizo valer.

Establecido este punto, tendremos la fase de cumplimiento de sentencia en donde siendo omisa la Autoridad a la misma (es decir no cumple con lo condenado y por lo tanto no entra en el supuesto de tener por cumplida la sentencia y en su caso no se puede tener por terminado el asunto) se dará pie a que se lleven a cabo los apercibimientos que la ley determina.

Basándonos detenidamente en lo que el C.P.A.E.M pronuncia con relación al incumplimiento y una vez realizándose el análisis del exceso o defecto en la ejecución de la sentencia, así como la petitoria del particular al incumplimiento de sentencia, hagamos una breve descripción de lo que nos orilla al apartado de este capítulo.

Primero: la medida del apercibimiento a la Autoridad por incumplimiento.

Segundo: como resultado de cumplimiento omiso al requerimiento se determina la imposición de la multa, la cual puede ir en aumento.

Tercero: a falta del cumplimiento anterior se establece el requerimiento al superior jerárquico y en caso de no entrar en ese supuesto se requiere a la propia Autoridad.

Cuarto: la destitución de la Autoridad por parte de la Sección de Sala Superior del Tribunal, siempre que no goce de fuero constitucional.

Como hemos podido señalar en este apartado cada una de las acciones planteadas en los capítulos anteriores es determinante para tener como resultado la destitución del Servidor Público cuestión que se encuentra regulada por la ley y que, llegando a este punto es momento de precisarlo y con esto dar paso al siguiente capítulo de esta investigación.

La Sala Superior, la definiremos como el órgano más alto de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se compone de una Magistratura y Cuatro Secciones que, se encargan, principalmente de resolver los recursos hechos valer por la parte interesada y en los cuales debe de revocar, confirmar o modificar la sentencia emitida por la Sala Regional, las cuales cada Sala tendrá una Sección que se encargue de revisar los recursos en contra de las resoluciones que se emitan en primera instancia o los acuerdos que determinan la procedencia del Recurso de Revisión.

Las Secciones del Tribunal se dividen de la siguiente manera:

La Primera Sección conoce de los recursos promovidos en la Primera y Séptima Sala Regional.

La Segunda Sección conoce de la procedencia de los recursos hechos valer ante la Segunda y Tercera Sala Regional.

La Tercera Sección conocerá de los promovidos por la Cuarta, Quinta y Sexta Sala Regional.

Por último, existe una Cuarta Sección Especializada en Responsabilidad Administrativa que al igual que las anteriores, actúa como segunda instancia, pero ante

las Salas Especializadas en esta materia (Octava y Novena). (Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 2020)

Definido lo conducente, entendemos porque una de sus atribuciones es la destitución del Servidor Público, en este sentido el C.P.A.E.M determina que este órgano podrá decretar la destitución de la Autoridad de su cargo, sin hacer ninguna otra mención de lo anterior más que el señalamiento de que, en caso de tratarse de Autoridades que gocen de fuero constitucional se deberá presentar la solicitud de desafuero ante la Legislatura local.

Esto es en términos generales lo que la ley Adjetiva de esta materia determina con relación a la destitución del Servidor Público que fue omiso en la fase de cumplimiento de sentencia, señalados en el inicio de este apartado, esto quiere decir que no existe de manera exacta en la ley las formalidades y procedimientos que se deben seguir para el ejercicio de esta facultad atribuida a la Sala Superior.

De manera importante tampoco se señala que pasa con las multas impuestas a las Autoridades, si deben de cumplirse o con la destitución del Servidor Público se configura una sanción única.

También debemos precisar que, en términos de ley, se reconoce la Responsabilidad a todas las Autoridades involucradas, (Autoridad condenada y la Autoridad Requerida y todas aquellas implicadas) pero no se señala la gravedad de su actuar y mucho menos la sanción a la que son acreedores o en el tipo de Responsabilidad que se está presentando.

Con todo esto, determinamos que debe señalarse en las leyes competentes y aplicables el incumplimiento de la sentencia como una Responsabilidad Administrativa grave.

Estableciendo el incumplimiento de sentencia como una Falta, así como los datos numéricos del cumplimiento real, será obvio precisar un Procedimiento que sanción esta falta, esto deviene a la necesidad en atender a esta laguna que presenta el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para sancionar el incumplimiento de las ejecutorias que dictan las Salas de jurisdicción ordinaria del

Tribunal, a través de un procedimiento debidamente fundamentado en las leyes competentes y a su vez dar pauta a un cumplimiento de sentencia del Contencioso Administrativo, que es de donde nace esta falta, todo esto para que el Tribunal como órgano juzgador pueda garantizar la protección total a los interés y derechos de los gobernados, reconocidos en la sentencia y que en algún momento nosotros como gobernados y en su caso como parte afectada al incumplimiento en el Proceso Administrativo, tengamos las herramientas necesarias en la ley para exigir una sanción completa y efectiva a las autoridades responsables.

Con lo anterior, en este trabajo de investigación a continuación definiremos los puntos más importantes para entender la naturaleza jurídica de la Responsabilidad Administrativa y así poder relacionarlo con el punto detallado con anterioridad, para así tener presente las determinaciones que deben ser tomadas en cuenta para establecer a este incumplimiento como una falta grave dentro de la naturaleza de esta rama Administrativa.

Una vez entendido esto es lógico que debemos analizar un cierto número de leyes que expresan su normatividad a esta materia y a la sanción de la destitución de los Servidores Públicos y de manera específica, esta determinación como una facultad por parte de las Secciones de Sala Superior que se le es encomendada de acuerdo al incumplimiento de la sentencia recaída en un Proceso Administrativo en donde dicha condena recae sobre la Autoridad y así tener presentes los puntos importantes que deberían tomar en consideración las leyes que analizaremos en los próximos apartados de esta investigación.

CAPÍTULO CUARTO: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

4.1 Definición y Características de la Responsabilidad Administrativa. 4.2 Los Grados de la Responsabilidad Administrativa Reconocidos por la Ley 4.3 Sanciones que se Determinan en la Responsabilidad Administrativa 4.4 El Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Llevado a Cabo Ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

Como se ha ido anunciando dentro de este capítulo analizaremos la naturaleza de la Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, a fin de tener por concluida la importancia de las sanciones que la ley determina para esta rama del derecho y así poder exponer con mayor claridad la relevancia sobre una Responsabilidad expuesta en las leyes competentes en relación al incumplimiento de la sentencia por parte de los Servidores públicos que fungen en carácter de demandado en un Juicio Contencioso Administrativo amén de entender esta figura y poder relacionarla con la problemática que dio nacimiento a esta investigación.

A lo largo de la historia esta figura poco a poco ha ido ganando peso en la legislación mexicana pues se tienen registro de su implementación en documentos históricos, tal es el caso de la Constitución de Apatzingán de 1814 que su principal atribución con relación a esta figura era la de dotar al Congreso con la facultad de inhabilitar a los secretarios que emitían ordenes en contra de la Constitución. (Gutiérrez, 2014, pág. 281).

También otro ejemplo de lo anterior es su implementación ante el México independiente, como lo fue la Constitución del año de 1824 la cual dentro de sus ordenanzas determinaba la Responsabilidad al presidente por traición a la

independencia nacional o contra la forma de gobierno establecida, así como el cohecho. (López, 2013, pág. 16)

Como señalamos en el capítulo primero, actualmente la Constitución Mexicana determina en su artículo 108 la Responsabilidad para representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y todo aquel que tenga un cargo en el Congreso o dentro de la Administración Pública Federal y de los Organismos Autónomos, pero también establece Responsabilidad para los integrantes de las Legislaturas locales y Magistrados de Tribunales Superiores locales y demás Servidores Públicos locales y de lo cual serán responsables por violaciones a la Constitución y leyes Federales.²¹

Así entendemos que la Responsabilidad Administrativa radica en los altos funcionarios de la Federación, pero, también en los integrantes de la Administración Pública local y que no están exentos de ser juzgados en el actuar de sus funciones que se presentan en carácter de acciones u omisiones y que dichas actuaciones van en contra de la ley o los principios que la integran.

Esto en virtud de que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala en su artículo 130 que para efectos de Responsabilidad Administrativa se debe entender como Servidor Público a los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, Organismos Autónomos, en los Municipios y Organismos Auxiliares, entre otros.²²

²¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 108 Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común (...) Reforma 29-01-16 consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf

²² Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Artículo 130.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, organismos autónomos, en los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a las y los

Referente a los Servidores Públicos Estatales y Municipales, el Estado de México con la creación de la Secretaría de la Contraloría en 1989 y con la expedición de una nueva legislación en materia de Responsabilidad Administrativa para esta Entidad Federativa y sus Municipios (Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios), se le atribuyó a este órgano la facultad de vigilar el cumplimiento de las funciones en el ejercicio público de los Servidores.

Como se mencionó en los Antecedentes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México la competencia para conocer de los asuntos de Responsabilidad Administrativa grave de los Servidores Públicos y de los particulares, se le atribuyó debido a la implementación del modelo del SNA.

Respecto al tema de esta investigación iremos desglosando poco a poco la naturaleza de la Responsabilidad a fin de entender y exponer la importancia de que se reconozca la omisión del cumplimiento de las sentencias por parte de los Servidores Públicos locales como una Responsabilidad grave y como consecuencia debe existir una regulación concreta en las leyes competentes para dicha sanción, la cual es aplicada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por lo tanto el siguiente punto de este capítulo será definir la Responsabilidad Administrativa y establecer algunas características de la misma, que nos permitirán conocer cómo es su relación con las Salas Especializadas en esta materia y más adelante tratar de esclarecer por qué es Sala Superior quien determina la destitución de los Servidores Públicos por incumplimiento a sentencias y no las Salas Especializadas.

demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos. Las y los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de intereses ante las autoridades competentes y constancia de presentación de la declaración fiscal y en los términos que determine la ley

4.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Referente a la transición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México a Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se le dotó la competencia por materia para conocer sobre los asuntos relacionados a la Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.

Entonces tomaremos el concepto de Miguel López, referente a esta figura, la cual la define como *“aquella que se configura cuando algún Servidor Público, en el desempeño de su cargo o comisión, “no se ajusta a las obligaciones previstas en la ley”, y además por los actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia que rigen en el servicio público establecidos en la C.P.E.U.M.”* (Lopez, 2013, pág. 42)

Con esto tenemos algunos principales elementos previstos con anterioridad en el desarrollo de este capítulo y que es importante conocer de manera para entender mejor el trasfondo de la Responsabilidad. Primero, al Servidor Público, con lo definido entendemos que es aquella persona que ostenta un cargo dentro de la Administración Pública, cuyas facultades están orientadas a prestar un servicio y las cuales se encuentran regulada en algún ordenamiento legal.

Todo Servidor Público está obligado a cumplir lo que la ley le obliga, en términos de esta investigación y de manera más específica al caso que nos ocupa, está obligado a cumplir las sentencias que le condenan lo anterior en términos del C.P.A.E.M. y que al no cumplir se presenta una omisión que vulnera los derechos de los particulares, pero también afecta los principios que integran el cargo del servicio público, los cuales se han mencionado anteriormente y se encuentran reconocidos por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios (de aquí en adelante L.R.A.E.M y M.) en donde se determina que son aquellos que rigen el actuar de los Servidores, además de los ya mencionados la ley reconoce también la objetividad, el profesionalismo, la integridad, la rendición de cuentas, la eficacia y eficiencia como principios.

Esta misma ley determina que todo Servidor en el ejercicio de su cargo debe apegarse a la ley sin que este sea utilizado como un medio para obtener algún beneficio, tratar por igual a las personas actuando conforme a la cultura del servicio siempre protegiendo los Derechos Humanos.²³

Siguiendo con las disposiciones de esta ley, dentro de sus primeros artículos señala las Autoridades que deberán estar sujetas a las consideraciones de la misma y que por lo tanto al tratarse del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, su competencia se limitará a los Servidores Públicos de esta Entidad Federativa y de los Municipios que la integran.

Determina como sujetos de esta ley a los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal, quienes, habiendo fungido con este cargo, se encuentren en alguno de los supuestos establecidos por esta ley y los particulares vinculados con faltas administrativas graves; para el caso de esta investigación nos enfocaremos en la primera hipótesis planteada, en aquellos que integran la Administración Pública Estatal y Municipal.

Teniendo por señalada la competencia de la Responsabilidad Administrativa en el Territorio del Estado de México, debemos tener en cuenta que esta figura no es exclusiva de conocimiento para el Tribunal por conducto de sus Salas, sino que otras Autoridades facultadas para la aplicación y cumplimiento de lo determinado por la L.R.A.E.M y M. son la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización, el Consejo de la Judicatura y los Síndicos Municipales.

Dentro de la Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos tomaremos en cuenta tres posibles clasificaciones que aun cuando la ley anteriormente mencionada no reconozca o las defina de manera directa, la doctrina determina estos tipos de Responsabilidad de las que pueden ser sujetos los Servidores.

²³ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios Artículo 7

La primera es la Disciplinaria, el Centro de Investigaciones Jurídicas en Línea la define *“como aquella que nace de la trasgresión de una obligación Administrativa o de un deber impuesto a un funcionario o empleado.”* (CIJUL, 2020, pág. 2)

Entonces con esto, debemos entender que es aquella que, en el ejercicio de sus funciones, los Servidores Públicos incurren en un acto que sea en contra de lo regulado y permitido por algún ordenamiento legal, al cual están sujetos o en caso contrario que dentro de sus obligaciones incurran en alguna omisión.

El segundo tipo de Responsabilidad que encontramos es la Resarcitoria, definida como *“aquella que en la que incurren los Servidores Públicos que produzcan un daño o perjuicio, o ambos estimables en dinero, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso al patrimonio de los Entes Públicos Federales o de las Entidades Paraestatales Federales”.* (Lopez, 2013, pág. 43)

De esto entendemos que es aquella, que determinándolo en un aspecto local será aquella en la que los Servidores Públicos en el mal manejo de los recursos, generen una afectación a la Hacienda Estatal y por ende deben resarcir los daños y/o perjuicios que se generen.

La L.R.A.E.M y M. determina que el Tribunal tiene facultades para la imposición de sanciones a los Servidores Públicos Estatales y Municipales, así como los particulares cuando se presente este tipo de Responsabilidad o afecte al patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales.²⁴

Por último, tenemos la Responsabilidad Patrimonial definiendo simplemente a esta como *“la omisión de manifestación de bienes o por su extemporaneidad, así como la presentación de algún vicio en la declaración”.* La ley determina que todo Servidor Público está obligado a presentar esta declaración o la de situación de interés ante la Secretaría de la Contraloría.²⁵

Para la naturaleza de esta investigación, tomaremos en cuenta solamente la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria en razón de que, es la que se adapta a la

²⁴ Ley de Responsabilidades Administrativas de Estado de México y Municipios.

²⁵ Ley de Responsabilidades Administrativas de Estado de México y Municipios artículo 33

hipótesis que pretende demostrar esta investigación, para lo cual existiendo una omisión a una condena determinada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México el cual goza de plena autonomía, reconocida tanto en la Constitución Federal, así como en la de la Entidad Federativa la regulación a la Responsabilidad de esta falta, debe ser más profunda y tener un mejor enfoque en las disposiciones legales competentes a la materia.

Ahora entendida la cuestión previa, daremos paso a determinar la Responsabilidad Administrativa respecto de las faltas graves relacionadas al actuar de los Servidores Públicos, aun cuando la ley determina actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves estas no las señalaremos y definiremos dentro de esta investigación, pues no determinan una consideración necesaria e importante para este trabajo.

4.2 LOS GRADOS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RECONOCIDOS POR LA LEY

Para este apartado tomaremos como base lo determinado por la ley aplicable a la materia en el Estado de México, hay que tener en cuenta que, para las faltas relacionadas a los actos u omisiones de los Servidores Públicos, esta ley determina dos grados, la Responsabilidad Administrativa no grave y Responsabilidad Administrativa grave.

Las faltas Administrativas en términos de la legislación competente se definen como aquellas actuaciones u omisiones contrarias a la ley y que son vinculadas a las Autoridades.

Para este punto la ley hace la distinción que al referirse a faltas no graves se tendrá en cuenta que, son aquellas cuya sanción recae en la competencia de la Secretaría de la Contraloría.²⁶

²⁶ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 3, fracción XIII

Por su parte las faltas graves serán aquellos actos u omisiones que transgreden las obligaciones de los Servidores Públicos y cuya resolución y sanción corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.²⁷

Antes de la entrada en vigor de la L.R.A.E.M., que actualmente nos rige y que en atención a los antecedentes del Tribunal, este órgano no era competente para sancionar la Responsabilidad Administrativa, de hecho en términos de la legislación que regulaba a esta materia, la cual era la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, expedida el 18 de julio de 1994, el Tribunal actuaba como el competente para conocer de las impugnaciones a la resoluciones en esta materia y esto a través del Contencioso Administrativo, además el Tribunal como autoridad debía sujetarse a las disposiciones de esta ley.

De igual forma la clasificación de faltas no graves y graves anteriormente no existía, en virtud de que las autoridades competentes para conocer de las faltas eran la Secretaría de la Contraloría, la Legislatura del Estado, el Consejo de la Judicatura del Estado, los Ayuntamientos y Presidentes Municipales, así como otros órganos, esto en atención a los tipos de procedimientos llevados a cabo.

La clasificación que estipulaba la ley determinaba principalmente tres tipos de Responsabilidad Administrativa, la primera es la disciplinaria la cual sancionaba actos u omisiones de los Servidores Públicos respecto a sus obligaciones, como lo son la abstención de buena conducta en su empleo, abstenerse de desempeñar algún otro empleo y lo que conocemos actualmente como “contratación indebida”, entre otros.²⁸

El segundo tipo de Responsabilidad era la resarcitoria que, como lo señalamos es aquella que causa una afectación a la Hacienda Pública, cuyo conocimiento y sanción recaía en la Secretaria de la Contraloría en funciones de fiscalización y auditoria.²⁹

²⁷ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, artículo 3, fracción XIV

²⁸ Consultable en <https://docs.mexico.justia.com/estatales/mexico/ley-de-responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-y-municipios.pdf>, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Título Tercero, de las Responsabilidades Administrativas, Capítulo II, de la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria.

²⁹ Consultable en <https://docs.mexico.justia.com/estatales/mexico/ley-de-responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-y-municipios.pdf>, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Por último, tenemos la patrimonial señala aquella que se configura en la manifestación de bienes y registro patrimonial.³⁰

Además de estos Procedimientos, también regulaba lo relacionado al juicio político y la remoción de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso.

A través de la implementación del SNA y con la dotación de competencia del Tribunal para conocer de Responsabilidad Administrativa, se abrogó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y entro en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y se reestructuraron estos procedimientos a través de las faltas graves y no graves, así como lo relativo al juicio político y la Responsabilidad vinculada a los particulares.

Las faltas no graves tienen una regulación dentro de esta ley, la misma determina una serie de apartados que componen la naturaleza de esta falta. La razón de citar este tipo de Responsabilidad es que se entienda la situación entre ambas figuras y tener presente la línea de diferencia que determinará las faltas no graves de las graves.

Antes de definir las faltas no graves hay que reafirmar que, en caso de que se incurra en esta Responsabilidad Administrativa, la Autoridad competente para conocer es la Secretaría de la Contraloría y para faltas graves el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México por conducto de sus Salas Especializadas, faltas que serán promovidas por la por la Secretaría de la Contraloría, los Órganos Internos de Control de las dependencias del Ejecutivo, los Municipios, los Órganos Autónomos y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Municipios, Título Tercero, de las Responsabilidades Administrativas, capítulo IV del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias

³⁰ Consultable en <https://docs.mexico.justia.com/estatales/mexico/ley-de-responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-y-municipios.pdf>, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Título Tercero, de las Responsabilidades Administrativas, título cuarto capítulo único del Registro Patrimonial de los Servidores Públicos

Con lo mencionado tenemos que, existirá una Autoridad Investigadora que estará adscrita a las dependencias antes mencionadas, dicha investigación podrá realizarse de oficio, por denuncia o las que deriven por auditorías practicadas.

Concluida la diligencia de investigación, la Autoridad Investigadora deberá analizar los hechos, así como de la información recabada y con esto emitir un informe de presunta Responsabilidad a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la L. R. A. E. M. y M. determina como falta administrativa no grave o grave.³¹

Determinada la falta, en caso de ser no grave le corresponde a la Secretaría de la Contraloría imponer la sanción correspondiente y en caso de ser grave, se debe remitir el asunto a la Sala Especializada competente del Tribunal en esta materia.

En términos generales, para los casos de una falta no grave, el Artículo 50 de la L.R.A.E.M y M determina que un Servidor Público recae en esta cuando:

No Cumpla sus funciones con disciplina, no tener buena conducta en su empleo cargo o comisión, así como la falta de respeto ante sus subalternos y el incumplimiento a lo ordenado por sus superiores.

No presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial, abstenerse de rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones o solicitar requisitos, cargas tributarias o cualquier otro concepto adicional no previsto en la ley, que tengan por objeto condicionar la expedición de licencias de funcionamiento para unidades económicas o negocios, así como no proporcionar, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, documentación comprobatoria de la aplicación de recursos económicos de carácter Federal, Estatal o Municipal.

No colabore en procedimientos judiciales o administrativos, no denuncie actos u omisiones que puedan constituir una falta administrativa, no cumpla con los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o la falta de cercioramiento en las

³¹ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios Artículo 104.

funciones que realicen los Servidores Públicos que tiene a su subordinación y por ende que no vayan acorde a lo determinado por la ley.

No Cerciorarse que, en la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, el particular manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La falta de actuación y ejecución de los planes, programas, presupuestos y demás normas a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, así como el descuido y resguardo de la documentación e información que este en a su encargo.³²

En este caso la sanción correspondiente de acuerdo con el artículo 79 de la ley referida, podrá ser:

- I. Amonestación pública o privada.
- II. Suspensión del empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo por un periodo no menor de un día ni mayor a treinta días naturales.
- III. Destitución de su empleo, cargo o comisión.
- IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un período no menor de tres meses ni mayor de un año.”

Sanciones que en el siguiente apartado detallaremos con algunas precisiones necesarias para un mejor entendimiento.

Ahora una vez señalada las faltas no graves, procederemos a la identificación de las faltas graves las cuales, retomando lo expuesto en el capítulo tercero en relación a la destitución de los Servidores Públicos por la Sección Sala Superior, se determina el grado de Responsabilidad a todas las Autoridades inmersas en esta omisión, por lo tanto y viendo las posibles faltas no graves podemos argumentar que la naturaleza de estos actos u omisiones no resultan tan relevantes como el incumplimiento a lo

³² Ver artículo 50 de la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

ordenado por una Autoridad Jurisdiccional en donde dicha omisión pone en vulnerabilidad la coercibilidad y la autonomía del Tribunal, así como los intereses y derechos de los gobernados, toda vez que lo determinado por las faltas no graves van más a lo relacionado en el actuar del Servidor y dichos actos, en su mayoría afectan solo a la naturaleza del Servidor Público o dichas afectaciones no causan un daño irreparable a los derechos de los ciudadanos o en todo caso a los principios que componen el Servicio Público, con esto no decimos que las faltas no graves, no quebranten el servicio de la Administración Pública Estatal y Municipal, sino que el impacto de la misma no se puede comparar al que se presenta en una falta grave.

La L. R. A. E. M. y M. determina como faltas graves en los actos u omisiones de los Servidores Públicos, el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual, el actuar bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el desacato y la obstrucción de la Justicia.

A continuación, definiremos cada falta:

El cohecho consiste en un actuar del Servidor en donde por motivos de las funciones que le fueron conferidas, este exige, acepta, obtiene o pretende obtener, algún beneficio el cual puede consistir en dinero, valores, bienes, etc. Ya sea para él o algún pariente o con quien tenga relaciones laborales, negocios o sociedades.³³

El peculado, basándonos en lo determinado por las leyes administrativas lo definiremos simplemente como la apropiación de recursos públicos, para el Servidor Público o persona cercada a él, en los supuestos mencionados en el cohecho.

El desvío de recursos públicos y utilización indebida de información, el primero de estos se refiere a que el Servidor Público en su actuar, solicita o autoriza recurso materiales, financieros o humanos, sin fundamento jurídico y el segundo se presenta

³³ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios artículo 53

una ventaja o beneficio con base a la información de la cual haya tenido conocimiento o se haya obtenido con motivo de su cargo o comisión.³⁴

El abuso de funciones lo entenderemos como el acto por el cual el Servidor Público, que, con motivo de su cargo, ejerza facultades que no están conferidas en la ley o que no le corresponden el cual genera dos cuestiones, por un lado, un beneficio para él mismo o en su caso, a sus parientes, conocidos, etc. y con esto se presente un afectado, el cual puede ser un ciudadano o Servidor público a quien dicho ejercicio de función no conferido por la ley le genera algún perjuicio.

El hostigamiento sexual, se configura en Responsabilidad Administrativa cuando el Servidor Público realice actos o requerimientos de carácter sexual, que afecten la labor o desempeño de otro. El acoso sexual se configura cuando el Servidor Público con propósitos de lujuria o erotismo sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la voz, de un Servidor Público, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, para ambas faltas no debe existir consentimiento del sujeto pasivo.³⁵

En términos de ley cuando un Servidor Público realiza actos, trámites, que por motivo de su empleo o cargo interviene y se encuentra impedido para actuar se determinará el conflicto de interés. Con relación al actuar cuando la ley no lo permite, incurrirá en contratación indebida cuando el Servidor autorice un nombramiento, contratación, etc. a persona alguna que, se encuentre impedido o inhabilitado para desempeñar dicha función.³⁶

En el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, se determina la Responsabilidad para el Servidor cuando se configure la falsedad en una declaración patrimonial o en aquella que tenga por objeto ocultar el incremento en su patrimonio.

³⁴ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios artículos 56 y 57

³⁵ Del acoso sexual; artículo 60 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

³⁶ De la actuación bajo conflicto de interés; sección séptima y de la contratación indebida; sección octava de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

De acuerdo con la “Guía para Identificar y Prevenir Conductas que Puedan Constituir Conflicto de Interés de los Servidores Públicos” este puede presentarse en manera positiva ya sea para beneficiar a alguien cercano o de manera negativa, para actuar en perjuicio de otro. (SFP, 2017, pág. 7)

El Tráfico de Influencias se presentará en el caso de que un Servidor Público incurra en la omisión de que otro Servidor realice algún acto que sea de su competencia y por lo tanto se genere un beneficio para el o algún pariente siempre que dicho Servidor utilice el cargo o comisión que se le fue conferido.

Ahora las siguientes tres faltas que definiremos, servirán para entender bajo qué criterios puede operar el incumplimiento de sentencias por parte de los Servidores Públicos como un estado grave, por la razón de la naturaleza que representan las mismas.

La primera falta que tenemos es el encubrimiento, la ley aplicable a la materia establece de manera textual lo siguiente:

“**Artículo 65.** Incurrirá en encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.”

De este apartado entendemos que un Servidor Público, bajo el cargo o comisión que ocupa, realice acciones que tengan por objeto ocultar algún acto u omisión que se haya realizado en el ejercicio de las funciones que le fueron concedidas.

Continuando, el desacato, se refiere que, cuando un Servidor Público proporciona información falsa o no da respuesta, dilate la entrega de la información, aun cuando hayan sido necesarias medidas de apremio, de lo anterior cuando se trate de requerimientos o resoluciones de Autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales o cualquier otra competente.

Por último, tenemos la obstrucción de justicia la cual determina la Responsabilidad solo para los Servidores Públicos inmersos en la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas, en donde realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificadas como graves, no inicien el procedimiento de Responsabilidad ante la Autoridad competente, dentro del plazo de treinta días naturales o revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo lo dispuesto por la L.R.A.E.M. y M.³⁷

Teniendo presentes estas faltas que constituye la gravedad en las acciones u omisiones de un Servidor Público, es ahora de definir otro factor importante para esta investigación y es las sanciones que constituyen al presentarse estas faltas.

Y es que el tener ambos factores completos ayudarán a entender la naturaleza de la omisión del incumplimiento a las sentencias, por una parte las faltas mencionadas podrán ayudarlos a desarrollar de manera detalla la naturaleza de dicha omisión, además de poder establecer la razón por la cuál debe ser incluida dentro de dichos actos y omisiones, que ley determina como graves y por otra parte conocer las sanciones que se presentan ante este grado de Responsabilidad, nos permitirá entender el por qué la destitución es tomada como la correspondiente a este tipo de omisiones.

4.3 SANCIONES QUE SE DETERMINAN EN LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Las sanciones por faltas no graves, como se mencionó en el apartado de estas faltas, se puede aplicar la amonestación pública o privada, suspensión del cargo o comisión, destitución cargo o comisión o la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

La amonestación es definida como una corrección disciplinaria que tiene por objeto mantener el orden, la disciplina y el buen funcionamiento en el servicio público.

³⁷ Ver artículo 67 de la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Consistente en la advertencia que se hace al Servidor Público, haciéndosele ver las consecuencias de la falta que cometió, mediante la cual se pretende encauzar la conducta del servidor público en el correcto desempeño de sus funciones, exhortándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincide, que a diferencia del apercibimiento, ya no es una simple llamada de atención, pues su objeto es prevenir la posible comisión de un ilícito. (Contraloría, 2020)

Hay que tomar en cuenta que la ley determina dos tipos, la pública y la privada, la primera de ellas corresponde a que la amonestación debe quedar sentada en el expediente correspondiente (como los llevados durante proceso o procedimiento administrativo), en donde se harán publicaciones de la misma y la privada corresponde a una situación verbal que se queda por escrito en el expediente personal del Servidor Público, en ambos casos si se reitera dicha actuación se impondrá una sanción mayor.

Para el caso de la suspensión para ejercer un cargo, empleo o comisión, esta tiene por objeto el impedimento del Servidor Público para realizar sus funciones por un tiempo determinado, el cual para este tipo de Responsabilidad no podrá ser menor a un día ni mayor a treinta días naturales.

Esta sanción no debe confundirse con la medida cautelar en la que se pueden apoyar las Autoridades Investigadoras para el desarrollo de las etapas que la ley les otorga. Por lo tanto, se entiende que este tipo de sanción tiene dos propósitos, uno; para evitar sean destruidas pruebas, evitar daños u obstáculos en el procedimiento y tenemos la suspensión que se encuentra en la sanción por faltas no graves y graves y la cual se ve reflejada en la resolución, el cual es determinada por la Autoridad Resolutora (la Secretaría de la Contraloría o el Tribunal según sea el caso del grado de la Responsabilidad).

Ahora, la Destitución del Servidor Público de su empleo, cargo o comisión se refiere a la separación definitiva del Servidor sobre el cargo que ostenta en la dependencia ante la cual se encuentra habilitado. Esto es que con base en la resolución que determine su Responsabilidad Administrativa este dejará de prestar su trabajo en la dependencia pública.

Con el objeto de tener presente la importancia de esta figura dentro de las sanciones por Responsabilidades y tener presente la delicadeza e importancia que amerita esta figura, señalaremos lo determinado que expone la Secretaría de la Contraloría respecto de los Servidores Públicos que son separados de su empleo por una resolución en un Procedimiento de Responsabilidad, a lo cual determina en lo siguiente:

“La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, debe ser demandada por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en términos de las leyes respectivas; es decir, que la resolución administrativa por la que se impone como sanción la destitución del empleo, cargo o comisión surtirá sus efectos en forma distinta, si se trata de trabajadores de base o trabajadores de confianza, en el primer caso, el área legal de la dependencia o entidad presentará, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, demanda laboral en contra del servidor público responsable, toda vez que la separación definitiva del trabajador de base debe fundamentarse en una causa justa y su nombramiento dejará de surtir efectos solamente por laudo firme dictado por el tribunal en cita. En el segundo de los casos la resolución administrativa por la que se impone como sanción al servidor público de confianza la destitución del empleo, cargo o comisión surte efectos desde el momento que le es notificada oficialmente.” (Contraloría, 2020)

Ahora, esta figura está presente dentro de la Responsabilidad Administrativa en un grado grave, con la diferencia que, como se ha ido señalado con anterioridad una es competencia de la Secretaría de la Contraloría y la otra del Tribunal.

Otra sanción que la ley contempla es la inhabilitación temporal para ejercer un cargo público o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, esto es que el Servidor Público pierde su estatus Público, aunque para este caso la ley determina que esta sanción es aplicable por un período no menor de tres meses ni mayor de un año.³⁸

³⁸ Artículo 79 fracc. IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Para estas faltas la ley determina que se debe tomar en cuenta el cargo que ostenta el Servidor Público, nivel jerárquico, reincidencia y que no haya sido sancionado por la misma falta o actuado de forma dolosa.³⁹

Definidas las sanciones para la Responsabilidad no grave, daremos paso a señalar las que se presentan cuando el Servidor comete una falta grave, el artículo 82 de la ley competente a esta materia determina de igual manera que en las faltas no graves la suspensión y la destitución del empleo, cargo o comisión, con la diferencia que la primera de estas será sin goce de sueldo por un periodo no menor de treinta ni mayor a noventa días naturales.

De igual forma señala la inhabilitación como sanción, la diferencia radica en que el Servidor Público no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo no menor de un año ni mayor a diez años, siempre que el monto de la falta administrativa grave no exceda de doscientas veces el valor diario de la U.M.A o si el monto de la afectación excede de doscientas veces el valor diario de la U.M.A será por un periodo no menor a diez años ni mayor a veinte años, además cuando no exista beneficio obtenido por el Servidor Público o no se provoque algún daño o perjuicio, se podrán imponer de tres meses a un año la inhabilitación.⁴⁰

Por último, otra sanción que determina es la económica, la cual tiene por objeto reparar las afectaciones que se generaron con motivo de la falta administrativa, pero también al beneficio obtenido por el Servidor Público, por lo tanto la ley determina para este caso que dicha sanción no podrá ser menor o igual al beneficio obtenido, además esta podrá ser hasta dos veces del equivalente del beneficio que se alcanzó para el Servidor Público o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que él o las personas antes referidas formen parte.⁴¹

³⁹ Ver artículos 80 y 81 de la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

⁴⁰ Artículo 82 fracc. IV apartados a) y b). de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

⁴¹ Ver artículos 52 y 82 Fracc. III apartados a) y b) de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Para la imposición de estas sanciones, el Tribunal debe tener a consideración lo ordenado por el artículo 84 de la ley mencionada, que a la letra determina lo siguiente:

“El empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la Falta.

II. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio.

IV. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.

V. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

VII. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable “

Como podemos observar la diferencia entre las condiciones que se toman en cuenta para valorar la aplicación de la sanción correspondiente, no varía mucho entre las faltas no graves y las graves, básicamente queda a disposición del órgano resolutorio determinar lo correspondiente, analizando la situación individual de cada Autoridad, así como la naturaleza de la Responsabilidad de la que sus acciones u omisiones los hicieron acreedores.

Como último punto de este capítulo y teniendo ya las bases importantes para el entendimiento de esta figura y las que son necesarias para el papel que desarrollan en esta investigación, es momento de señalar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa llevado a cabo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, ya que es un procedimiento diferente al Proceso Administrativo e incluso al Procedimiento Administrativo, pero necesario para que en el desarrollo del siguiente capítulo exista una mejor fluidez y entendimiento en las consideraciones hacia la Responsabilidad de las Autoridades que son omisas ante lo ordenado en una sentencia por parte de las Salas del Tribunal.

4.4 EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA LLEVADO A CABO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO

Así como en el Proceso Administrativo las Salas Regionales son competentes para conocer de los asuntos Administrativos y Fiscales señalados en el artículo 229 del C.P.A.E.M. también lo serán para las determinaciones de la Responsabilidad Administrativa, pues recordemos que este a través de reformas fue dotado para conocer de esta materia, a diferencia de los asuntos Administrativos y Fiscales que son competencia de la Primera a la Séptima Sala Regional y para la materia de Responsabilidad Administrativa será competente la Octava y Novena Sala Regional.

Haciendo énfasis en lo indicado de que el Tribunal conocerá de la Responsabilidad Administrativa grave, de igual forma como se señaló todo inicia con una investigación relazada por la Secretaría de la Contraloría, los órganos internos de control, al Órgano Superior, etc., los cuales emiten un informe de presunta Responsabilidad en donde teniendo la determinación de la falta grave será el Tribunal el órgano competente para llevar a cabo el Procedimiento correspondiente.

A diferencia del Contencioso Administrativo (y para el caso de esta investigación), se tienen como partes del procedimiento a la Autoridad Investigadora, al Servidor Público y terceros interesados.

Las Autoridades inmersas en este procedimiento serán tres, la Investigadora, la Substanciadora y la Resolutora.

La Autoridad Investigadora deberá recabar toda la información correspondiente a través de recolección de información, visitas o inspecciones y una vez practicado lo señalado, deberá analizar e identificar todo lo obtenido a fin de precisar si dicho actuar u omisión del Servidor Público se encuentra ubicado en uno de los supuestos que la ley señala como falta administrativa.

En caso de ser positivo, tendrá la facultad de realizar un informe de presunta Responsabilidad Administrativa y debe contener, el nombre de la Autoridad Investigadora y su firma, cargo, domicilio y adscripción del Servidor Público, los hechos, imposición que se imputa, así como las consideraciones de la falta, pruebas y la solicitud de medidas cautelares según el caso lo amerite.

En este proceso son válidas las medidas cautelares que, como se señaló en la sanción de suspensión, estas principalmente son solicitadas para evitar la obstrucción de justicia, la ley determina además como medidas, el embargo precautorio o el apercibimiento de multas. Además, estas se tramitan de forma incidental.

Una vez realizado dicho informe, este debe ser presentado ante la Autoridad Substanciadora que no podrá ser la misma a la investigadora, por lo tanto, se deberá tener a lo determinado por la estructura orgánica de la Secretaría de la Contraloría.

Una vez presentado el informe, se emplazará al Servidor Público para que se presente a día y hora señalado para la celebración de la audiencia inicial. Llegado el día de la audiencia, el Servidor Público bajo su carácter de presunto responsable deberá rendir su declaración ya sea de forma oral o escrita. Además, podrán ser llamados terceros que deberán concurrir a la audiencia y manifestar lo que a su derecho convenga, así como ofrecer pruebas.

La audiencia tendrá por objeto, la presentación de declaraciones, pero también el ofrecimiento de las pruebas, las pruebas admitidas en este procedimiento son, la testimonial, documental, pericial (que, al ser solicitada, el perito, pasará a ser parte del juicio), inspeccional y al igual que en el Proceso Administrativo, la confesional no es admisible.

Finalizada las admisiones de lo anterior se dará por cerrada la audiencia inicial y por ende solo se podrán llegar a presentar pruebas supervinientes.

Cerrada la audiencia, en un término de tres días hábiles la Autoridad Substanciadora deberá enviar al Tribunal (esto en el sentido de que estamos desglosando el procedimiento por Responsabilidad Administrativa grave) los autos del expediente en

original, así como verificar de manera estricta que el informe sea considerado como grave, además deberá notificar a las partes la recepción del expediente.⁴²

Una vez notificadas de manera correcta a las partes, el Tribunal en términos de la ley, deberá dictar dentro del plazo de quince días hábiles siguientes, el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, así como la práctica de alguna diligencia.⁴³

Desahogadas las pruebas de las partes y la no existencia de alguna diligencia pendiente, se dará paso a la fase de alegatos que tendrá un término de cinco días hábiles. Finalizado el término el Tribunal de manera oficiosa dará por cerrada la fase y en un plazo no mayor a treinta días hábiles (que puede ampliarse hasta un doble del término), las partes serán citadas a presentarse para oír la resolución correspondiente que en términos del artículo 193 de la L.R.A.E.M y M debe contener:

Lugar, fecha y Autoridad Resolutora correspondiente, así como su competencia, la motivación y fundamentación que la sustentan, los antecedentes, la valoración de cada una de las pruebas, el análisis lógico jurídico en que se sustente la emisión de la resolución, la existencia o inexistencia de los hechos que la ley determine como falta administrativa grave, la sanción a imponer al Servidor Público y los puntos resolutivos, que deberán precisar la forma en que deberá cumplirse la resolución.⁴⁴

Ante el procedimiento de Responsabilidad, podrá aplicar la improcedencia y el sobreseimiento, de igual forma el recurso de revocación, que es contra de las resoluciones por falta no grave. También son admisibles el recurso de reclamación y el de apelación en donde el primero de estos es en contra de las resoluciones de las Autoridades substanciadoras o Resolutoras y el segundo de ellos contra las resoluciones emitidas por el Tribunal.

Por último, en este Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, también se presenta una fase de cumplimiento, para el caso de esta investigación, en el sentido de que recaiga la Responsabilidad Administrativa grave y la sanción sea la destitución,

⁴² Artículo 195 fracc. I y II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

⁴³ Artículo 195 fracc. II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

⁴⁴ De las sentencias definitivas, ver artículo 193 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

suspensión o inhabilitación, el Tribunal de manera oficiosa, deberá notificar la sentencia correspondiente, y las Autoridades deberán dar aviso de su cumplimiento en un término de diez días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia. En el caso de las sanciones correspondientes se dará vista al superior jerárquico y para el caso de indemnizaciones o sanciones económicas se deberá dar vista a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.⁴⁵

Una vez descrito el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa llevado a cabo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, lo siguiente en analizar en esta investigación será la determinación de las circunstancias que califican al incumplimiento de sentencia como una Responsabilidad Administrativa grave, la definición de las faltas que ameritan esta Responsabilidad nos ayudarán a tener presente los elementos necesarios para entender de qué manera se puede configurar el incumplimiento de sentencias por Servidores Públicos como una falta grave, además definido el Procedimiento nos permitirá determinar cuál puede ser una posible postura ante dicha falta y que papel desarrollan las leyes competentes, el Tribunal y su Sala Superior ante la destitución del Servidor Público quien además está fungiendo como condenado dentro de un Proceso Administrativo.

⁴⁵ Artículo 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

CAPÍTULO QUINTO. LA DESTITUCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS COMO SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO

5.1 El Incumplimiento de Sentencias como una Responsabilidad Administrativa 5.2 Identificación de Leyes que Regulan la Responsabilidad Administrativa: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 5.2.1 Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 5.2.2 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 5.2.3 Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 5.2.4 Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México 5.2.5 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 5.3 Consideraciones que se Deben Regular en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y Demás Leyes Auxiliares Para la Destitución De Servidores Públicos por Parte de Sala Superior. 5.4 Propuesta a un Procedimiento ante el Incumplimiento de Sentencia

Como se ha ido identificando a lo largo del desarrollo de este trabajo, cada una de las actuaciones procesales planteadas darán como resultado la fase de este capitulado, más que una fundamentación, lo próximo a desarrollar tendrá que ver con una propuesta basada en lo regulado por las leyes administrativas competentes.

A continuación, señalaremos las actuaciones que nos condujeron hasta este punto, esto con el fin de tener presente bajo qué criterios esta investigación está exponiendo la Responsabilidad Administrativa por incumplimiento a las sentencias y con esto determinándose la destitución de la Autoridad demandada de su cargo.

Desde el inicio de la procedencia de la demanda, que esta debe ser entre una de las Salas Regionales competentes para conocer de los asuntos que determina el artículo 229 del C.P.A.E.M., teniendo presente la procedencia necesaria para esta

investigación que, como se ha dicho reiteradamente, es aquella en donde un actor sea un particular y el demandado una Autoridad y desarrolladas de manera correcta cada una de las fases procesales que se determinan tanto para el Juicio Administrativo, Fiscal y Sumario.

Estando en la fase de audiencia y celebrada la misma, damos paso a la sentencia, misma que deberá de cumplir con los requisitos de ley y que, además, para este trabajo, deberá recaer en contra de los actos de las Autoridades demandadas, es decir declarar la invalidez de los actos impugnados y así que una vez notificada y sin que se haya hecho valer algún recurso judicial en contra de la misma, se pueda dar el cause ejecutoria y con ello notificarse para su cumplimiento.

Agotadas las medidas que determina el Tribunal para el cumplimiento de la ejecutoria en el término de los tres días hábiles y efectuadas las omisiones de la Autoridad ante los requerimientos especificados en el capítulo de “cumplimiento”, los cuales determinan las Salas con base en la ley, esta misma reconoce que las Secciones de Sala Superior tienen la facultad de destituir a la Autoridad y así esta recae en Responsabilidad.

5.1 EL INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS COMO UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Con los puntos mencionados, determinaremos las razones por las cuales este incumplimiento se configura como una falta grave y referente al procedimiento a llevar, debe ser diferente al procedimiento de Responsabilidad Administrativa ya regulado por la naturaleza que representa esta falta, cuestión que señalaremos más adelante.

De inicio desglosaremos las dos palabras que lo componen la falta que pretendemos demostrar; el incumplimiento y sentencia. El incumplimiento nacerá de una omisión y se define de forma general como aquella en la que no se cumple una obligación en ciertos términos existentes.

En este sentido se configura a la omisión de la Autoridad demandada y condenada en atender a la resolución planteada en la sentencia dictada por una de las Salas Regionales.

La sentencia, en términos de lo establecido en el capítulo correspondiente de esta investigación la entenderemos como aquella que da por concluido un proceso y da paso a una serie de etapas procesales (en este caso la fase de incumplimiento) o puede dar como resultado la ejecución de ciertos recursos legales para impugnar la misma (en este sentido el Recurso de Revisión) la cual es ejecutada por un Magistrado y se compone por una serie de requisitos forma y fondo como lo son los actos llevados a cabo durante el proceso y atender a la motivación y fundamentación del juzgador para determinar su razonamiento ante lo planteado por el actor o por el demandado, es decir respecto a las pruebas, hechos, pretensiones y defensas hechas valer por las partes, a fin de dictar la validez o invalidez del acto administrativo demandado.

Con esto, entendemos que la ley es aplicable a todos sin excepción, en materia Administrativa, las leyes competentes auxilian al juzgador para la fundamentación de lo condenado, la desobediencia de las Autoridades al incumplimiento de estas debe ser regulado por los mismos ordenamientos aplicables a fin de que la protección a los intereses de los gobernados sea eficaz y se respeten los principios de la justicia administrativa reconocidos en el C.P.A.E.M.⁴⁶

Teniendo la definición de sentencia e incumplimiento ahora con base a la legislación existente en la regulación de las faltas estipuladas en la Ley de Responsabilidades de la Entidad Federativa, a continuación, señalaremos las características más importantes de estas, con el fin de poder dar una propia definición al incumplimiento de sentencia.

Como referencia tomaremos algunas ideas estipuladas sobre las faltas graves que si se encuentran reguladas por la L.R.A.E.M y M., en este sentido la primera falta a considerar será el tráfico de influencias retomaremos la idea de *“retrase u omite*

⁴⁶ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 3.- El procedimiento y proceso administrativo que regula este Código, se regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, transparencia, gratuidad y buena fe;

realizar algún acto de su competencia...” Esta es una idea central que completará una posible definición al incumplimiento de sentencias, pues el resto de la regulación de esta falta no se adapta con precisión a la idea que se pretende plantear, pues la regulación al tráfico de influencias se limita al simple hecho de tener una ventaja o beneficio.

Dentro del encubrimiento tomaremos como idea la cuestión que plantea *“el Servidor Público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas...”* el concepto referente al encubrimiento se configura en lo plateado para determinar una noción complementaria al incumplimiento, pues en términos de ley esta falta se limita al ocultamiento de algún acto u omisión que pudiera ser Responsabilidad Administrativa, pero en cuestión de que el incumplimiento de sentencias no es Responsabilidad Administrativa ante la legislación competente, no se puede configurar dicha falta.

Referente al desacato simplemente tomaremos como idea la señalada en *“requerimientos o resoluciones de Autoridades (...) judiciales...”* este concepto se determina especialmente a la entrega o retraso de información necesaria y requerida al Servidor Público.

Por último, de la obstrucción de justicia, estableceremos la idea de que, debido a ciertas actuaciones de las Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y Resolutoras en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, se retrase la impartición de justicia o no permitan llevar a cabo ciertos procedimientos.

El señalamiento de estas Responsabilidades no solo nos permite adaptarlas a una posible falta por incumplimiento de sentencias, sino que también permite entender que dichas faltas ya reguladas por la ley competente no pueden actualizarse por completo a los supuestos que implica la omisión del cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal, quien se rige por ciertos principios el cual, además, tiene autonomía y coercibilidad.

Cada una de las nociones citadas de las faltas por Responsabilidad Administrativa grave, ya reguladas en la L.R.A.E.M y M., podrán ayudarnos a construir una naturaleza

del incumplimiento de sentencias, ya que, las determinaciones señaladas en el encubrimiento y tráfico de influencias, podemos actualizarla para el caso de que estas faltas serán aplicadas a Servidores Públicos que en el ejercicio de sus funciones atrasen o llegaren a realizar algún acto u omisión que se pueda entender como Responsabilidad Administrativa.

En lo retomado del desacato la idea resulta más completa pues la actualizamos en el sentido de los requerimientos realizados por la Sala Regional antes de que se determine la destitución del Servidor Público, además la idea se adapta en el supuesto de que cuando la Autoridad fue requerida para cumplir con la condena y no lo realizó ni en tiempo ni forma, por lo tanto, deben tomarse medidas en términos de ley.

La obstrucción de justicia servirá como referente en el sentido de que hay requerimientos por parte de una Autoridad Jurisdiccional y que no es atendida por la Autoridad demandada, por lo tanto, la impartición de justicia se ve vulnerada, así como los principios rectores del Proceso Administrativo.

Con todo lo señalado, determinaremos una definición adecuada al incumplimiento de sentencias en un Proceso Administrativo, lo cual entenderemos como:

“Se presenta incumplimiento cuando en el cause ejecutoria de una sentencia dictada en un Juicio Administrativo o Fiscal y realizada la notificación del cumplimiento de la misma, la Autoridad condenada sea omisa en atender lo ordenado en la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por conducto de sus Salas Regionales, en donde el Servidor Público, ante los requerimientos realizados por las mismas, según los supuestos de la Sección novena del C.P.A.E.M., no den respuesta al cumplimiento de la sentencia y por lo tanto pongan en vulneración los intereses y derechos de la parte actora reconocidos en la sentencia.

Esto es aplicable para todas las Autoridades inmersas según el artículo 281 del Código Adjetivo de la materia.”

Ahora una vez precisada la definición es momento de analizar algunas disposiciones de las leyes competentes en materia Administrativa con la intención de establecer bajo

que regulación se debe actuar ante esta falta y como la Responsabilidad Administrativa grave es la aplicable a este caso.

5.2 IDENTIFICACIÓN DE LEYES APLICABLES AL CASO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

Dentro de su título séptimo precisa a la Responsabilidad Administrativa, la importancia del señalamiento de este título es que delega la competencia de esta materia a la Ley de Responsabilidades del Estado de México y Municipios la cual en su artículo 130, párrafo dos, determina *“La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y sanciones en la Materia.”*

Determina que serán sancionados en el actuar o en la omisión de sus actuaciones que le sean encomendadas. También precisa las figuras de la Responsabilidad Administrativa que ya hemos señalado con anterioridad.

Si bien señala la investigación y sustanciación a los órganos de control y la resolución la Tribunal en las faltas graves, nuestra prioridad en este trabajo es que se encomiende de manera correcta y jerárquica al Tribunal el ejercicio de estas atribuciones, las cuales justificaremos más adelante en un procedimiento de Responsabilidad que consideramos debe ser implementado.

5.2.1 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Con lo determinado de este órgano en el desarrollo del capítulo de *“Responsabilidad Administrativa”* entendemos su relevancia ante esta materia, pues es esta misma Autoridad quien puede fungir como Autoridad Investigadora y Substanciadora.

La ley le reconoce a esta ley la facultad de conocer e investigar a los Servidores Públicos por supuesta Responsabilidad Administrativa, la propia ley señala las Autoridades competentes para estas facultades, pues, esta Secretaría no es la única

que puede actuar como Investigadora y Substanciadora, sino que también existen los Órganos Internos de Control.⁴⁷

Bajo este concepto la L.R.A.E.M y M. determina el Procedimiento de Responsabilidad llevado a cabo ante la Secretaría de la Contraloría que de manera breve se estipula lo siguiente:

Al igual que el procedimiento llevado ante el Tribunal, teniendo presente un informe de presunta Responsabilidad, se deberá presentar ante la Autoridad Substanciadora por medio de la Autoridad Investigadora.

Admitido dicho informe se señalará día y hora para la audiencia inicial, en donde se rendirán las declaraciones de la Autoridad y se ofrecerán pruebas, finalizado lo anterior se deberá dar por cerrada la audiencia.

De igual forma se hace un acuerdo de admisión de pruebas, para posteriormente deben ser desahogadas, ahora se deberá declarar abierta la fase de alegatos la cual es por un transcurso de 5 días hábiles.

Finalizado este plazo la Autoridad deberá declarar cerrada la instrucción y deberá dictar sentencia en un plazo no mayor a 30 días hábiles y para lo cual deberá citarse a las partes, además de comunicarles a las mismas la resolución correspondiente.

Referente a esto el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría (de aquí en adelante R.I.S.C) la Dirección de Responsabilidades, quien sirve como auxiliar del Órgano Interno de Control, es la encargada de substanciar y resolver el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, así como de imponer las sanciones para el caso de las faltas no graves.

Como podemos observar esta ley reconoce las facultades para conocer la posible Responsabilidad Administrativa de las Autoridades y posteriormente determinar la

⁴⁷ Reglamento interior de la Secretaría de la Contraloría. Artículo 2, Fracc. X Órganos internos de control: A las unidades administrativas en las dependencias y organismos auxiliares, encargadas de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos, y que dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría;

sanción aplicable para el caso en que se determine una falta no grave. En caso de una Responsabilidad grave remite el asunto al Tribunal.

Esta parte es de mucha importancia debido a que, es el punto central entre la falta no grave y grave de un procedimiento de Responsabilidad.

5.2.2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Establecida los lineamientos más importantes respecto de la Responsabilidad Administrativa ante la Secretaría de la Contraloría, ahora retomaremos lo estipulado ante la ley competente para el Proceso Administrativo en el Estado de México.

Para esta ley, es vital que el Proceso llevado ante las Salas siga las directrices de la legalidad, celeridad, eficacia y buena fe.

En principio de celeridad deberá aplicarse con el objeto de que en la impartición de justicia dentro del ámbito del Derecho Administrativo no se presenten trámites lentos o que obstaculicen el desarrollo del trámite del expediente, además de que estos sean realizados de la manera más rápida posible. (López, 2005, pág. 192)

El principio de eficacia referida en el Proceso Administrativo se refleja en la *“sencillez, rapidez y celeridad, en el actuar de las Autoridades con el objeto de que la impartición de justicia no se detenga y se afecten los derechos de los gobernados.”* (López, 2005, págs. 192, 193)

Referente al principio de legalidad, se determina que en las actuaciones del Proceso Administrativo debe existir un apego a las leyes, es decir el sometimiento a las Autoridades ante las leyes aplicables, no solo para el Tribunal sino para las Autoridades inmersas y a lo que concierne la buena fe es dirigirse con respeto y transparencia tanto las partes (particular y Autoridad) y el Tribunal.

Con estos principios entenderemos que las directrices del Proceso Administrativo van encaminadas principalmente a la buena impartición de justicia ante los actos de Autoridad que afecten a los particulares.

El C.P.A.E.M. dentro del aspecto de la Responsabilidad Administrativa, regula la aplicación de sanciones no solo a los juzgadores que no se apeguen a dichos principios, sino que también a las Autoridades que se vean involucradas en un Proceso o Procedimiento Administrativo ya que se determina lo siguiente:

“Artículo 2.- El incumplimiento de las disposiciones previstas en este Código, dará lugar a la responsabilidad de los Servidores Públicos, en los términos de la Ley de Responsabilidades.”⁴⁸

Para el caso de esta investigación entendemos que toda Autoridad que retrase la impartición de justicia deberá ser sancionada por Responsabilidad Administrativa, con la razón de no cumplir con eficacia, legalidad, celeridad y buena fe, mismos principios que se ven vulnerados en el actuar de los Servidores Públicos.

Respecto al apartado de cumplimiento en el Proceso Administrativo, como se determinó en el capítulo correspondiente en este trabajo, la ley reconoce la Responsabilidad Administrativa para todas las Autoridades requeridas para el cumplimiento de la sentencia, no determina bajo que supuestos se deben actuar ni que Autoridad es la competente para conocer de dicho asunto, solo determina la destitución por Parte de la Sección Sala Superior al Servidor Público correspondiente, condenado en dicha sentencia, es decir al demandado.

Ante este concepto a continuación señalaremos las cuestiones que determina la ley Orgánica del Tribunal respecto de la Responsabilidad Administrativa y la destitución del Servidor Público.

5.2.3 LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO

⁴⁸ Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Artículo 2

Esta ley nos permitirá conocer la integración, atribuciones, funcionamiento y estructura del Tribunal, referente al tema de esta investigación, determina las facultades de las Salas Especializadas para conocer de la materia de Responsabilidad Administrativa.

También determina la existencia de un Órgano Interno de Control para la investigación de presunta Responsabilidad dentro del personal que componen el propio Tribunal, el cual se encarga de la investigación y subsanación en el caso de la existencia de alguna falta determinada como no grave por la L.R.A.E.M y M y en su caso al tratarse de faltas graves, remitirlas a la Sala Especializada correspondiente.

Referente al cumplimiento de sentencia, como se mencionó en el apartado anterior de este capítulo la ley determina la competencia para la Sección de Sala Superior en el caso de poder dar por cumplida una sentencia, el C.P.A.E.M a la letra determina:

“Artículo 281.- En el supuesto de que la Autoridad o Servidor Público persistiere en su actitud, la sección de la sala superior resolverá a instancia de la sala regional, solicitar del titular de la dependencia Estatal, Municipal u Organismo a quien se encuentre subordinado, conmine al Servidor Público responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, en un plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta. Cuando la Autoridad u organismo no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente con ellas.

Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la resolución, la sección de la sala superior podrá decretar la destitución del Servidor Público responsable, excepto que goce de fuero constitucional.”

Con el señalamiento de lo anterior, la Ley Orgánica determina lo siguiente:

” Artículo 30. Son atribuciones de las Secciones de la Sala Superior:

(...)

III. Intervenir y resolver en definitiva el procedimiento de cumplimiento de sentencia, a solicitud de las Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria y Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal;”

Entonces entendemos que la cuestión importante hasta este punto de la investigación no radica en atender si debe ser o no una facultad de las Secciones de Sala Superior sino determinar el procedimiento y fundamento legal correcto para su aplicación dado que, en el C.P.A.E.M. determina la facultad de Sala Superior para atender este caso, pero la Ley Orgánica hace un señalamiento aún más amplio y abierto para resolver a petición de la Sala el cumplimiento de la sentencia, ambas leyes no están señalando un Procedimiento o de qué manera se deberá seguir dicha destitución o sanción aplicable.

Siguiendo con la investigación, a continuación, señalaremos unos pronunciamientos importantes regulados en el Reglamento Interior del Tribunal.

5.2.4 REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO

El Reglamento interior fue expedido con el objeto de regular las funciones y organización del propio Tribunal, referente a las facultades de Sala Superior hay una que destaca la cual determina como atribución de las Secciones de la Sala lo siguiente:

” Artículo 25. Los recursos de revisión, excitativas de justicia, cumplimientos de sentencia, excusas por impedimento y otros trámites que se sigan en la Sección, serán turnados por la Presidencia de Sección de la Sala Superior, para la formulación del proyecto de resolución, en número similar entre las Magistraturas, considerando las particularidades de cada caso.”

Con lo planteado entendemos que se reconocen algunas facultades de Sala Superior, mismas que nacen de un Proceso Administrativo, en su mayoría existe una regulación completa y un fundamento de su procedencia y competencia.

En el caso del Recurso de Revisión, este se encuentra regulado por el C.P.A.E.M en su capítulo cuarto, artículos 285 al 288.

En la Excitativa de justicia (derecho de las partes en un Proceso Administrativo para solicitar a Sala Superior que se dicte sentencia, cuando el Magistrado de una Sala Regional no lo haya realizado), esta ley adjetiva determina su regulación y procedimiento en su sección octava, artículo 277.

La excusa por impedimento de un Magistrado para conocer de ciertos asuntos se llevará conforme a lo determinado en el artículo 264 del C.P.A.E.M.

Con esto determinamos que ciertas atribuciones de Sala Superior cuentan con una regulación más completa a diferencia de otras como lo es lo relacionado a su facultad reconocida para el cumplimiento de sentencias.

5.2.5 LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

En el sentido de lo establecido que regula esta legislación, entendemos que es la competente para conocer de los asuntos de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Estado de México y de los Municipios que lo integran, de manera auxiliar el C.P.A.E.M determina ciertas regulaciones que esta ley hace valer.

El señalamiento de esta legislación radica en la importancia que desarrolla en el tema de esta investigación, pues no solo es un auxiliar para entender la naturaleza del incumplimiento de sentencias que tratamos de definir, sino que además junto al C.P.A.E.M es la legislación correcta para determinar una fundamentación y motivación de la destitución de un Servidor Público, pues recordemos que esta investigación reconoce como grave a esta falta.

Identificadas las leyes y con la definición de la naturaleza de la Responsabilidad Administrativa, entendemos que las leyes competentes para conocer del caso es el Reglamento y ley Orgánica del Tribunal, así como la Ley de Responsabilidades Administrativa del Estado de México y Municipios y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y dejando por un lado al reglamento de la Secretaría de la Contraloría ya que no determina ninguna cuestión respecto del cumplimiento de sentencias.

Con las normas antes mencionadas, a continuación, señalaremos el grado de Responsabilidad aplicable, así como algunas determinaciones importantes que deben ser incluidas en las leyes competentes para esta sanción.

5.3 EL GRADO DE RESPONSABILIDAD APLICABLE AL INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y LAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN REGULAR EN LAS LEYES ADMINISTRATIVAS PARA LA DESTITUCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS POR PARTE DE LAS SECCIONES DE SALA SUPERIOR

Para seguir con la directriz de este apartado de la investigación que radica en pulir las determinaciones pendientes para la sanción por incumplimiento de sentencia, a continuación, señalaremos la definición que anteriormente planteamos, esto con tener presente la idea de esta falta, pero también identificar las vías encaminadas para otorgarle la Responsabilidad Administrativa correspondiente.

“Se presenta incumplimiento cuando en el cause ejecutoria de una sentencia dictada en un Juicio Administrativo o Fiscal y realizada la notificación del cumplimiento de la misma, la Autoridad condenada sea omisa en atender lo ordenado en la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por conducto de sus Salas Regionales, en donde el Servidor Público, ante los requerimientos realizados por las mismas, según los supuestos de la sección novena del C.P.A.E.M. no den respuesta al cumplimiento de la sentencia y por lo tanto pongan en vulneración los intereses y derechos de la parte actora.

Lo anterior es aplicable para todas las Autoridades inmersas según el artículo 281 del Código Adjetivo de la materia.”

De acuerdo a la regulación de la Responsabilidad Administrativa, debemos tener presente que la facultad de Autoridad Resolutora se determina dependiendo el grado de la falta, con esto es importante entender que las leyes competentes, al reconocer su atribución para conocer sobre la “fase de cumplimiento” a las Secciones de Sala Superior y esta al pertenecer al Tribunal (de acuerdo con su organización jurisdiccional), se debe determinar como falta grave, ya que en términos de ley, esta grado es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

El señalamiento para identificarlo como una Responsabilidad grave a fin de que entremos en este planteamiento que determina la ley es decir falta grave: Autoridad competente Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, sino que es solo una cuestión de muchas que se presenta al configurarse esta falta.

Al menos encontramos cinco afectaciones que se configuran al presentarse el incumplimiento y cuestiones que no solo causan perjuicio a la parte afectada (actora) sino que se conforman una serie de vulneraciones en la esfera del Proceso Administrativo y el Tribunal.

Primero y los más importante la afectación a los derechos e intereses reconocidos a la parte actora en la sentencia y que dicha omisión de la parte demandada en dar cumplimiento, a fin de subsanar el acto o resolución Administrativa que emitió.

Segundo: el Acto Administrativo que fue declarado invalido por la sentencia, aun no ha sido subsanado de forma completa, pues es a través del cumplimiento de la sentencia que se permitirá una satisfacción completa a las pretensiones de la parte actora.

Tercero: las afectaciones a los principios rectores del Proceso Administrativo, señalados en el artículo 2 del C.P.A.E.M. y específicamente los referidos a la celeridad, eficiencia, buena fe y legalidad, así como aquellos que se aplican al Servicio Público.

Cuarto: los antecedentes del caso, es decir la fase de cumplimiento de sentencia, las vistas, desahogos, requerimientos, los derechos otorgados a la parte demanda, las multas y el actuar de la Sección de Sala Superior, configurándose en una etapa

perteneciente al Proceso Administrativo y que desde el cause ejecutoria hasta el último requerimiento, solo se pueden presentar omisiones por parte de la Autoridad demandada o en su caso respuestas que no den cumplimiento a la sentencia.

Quinto: la vulneración a la autonomía del Tribunal para el dictado de sus fallos y el cumplimiento de estos, así como el de sus procedimientos, facultad reconocida en el artículo 116 de la Constitución Federal y 87 de la Constitución Local.

Con estas cinco afectaciones consideramos que son suficientes para determinar la falta con una sanción grave, pues como podemos observar el alcance de la afectación de la omisión no se limita solo a la parte actora sino que presenta afectación al Proceso Administrativo, al Tribunal y al alcance de la Justicia Administrativa, esto da como resultado que la sanción aplicable a la falta sea una destitución, debido a que la Autoridad ya fue requerida por medio de las multas impuestas por el Tribunal.

Respecto a la definición que construimos al incumplimiento de sentencia, en el apartado de *“Lo anterior es aplicable para todas las Autoridades inmersas según el artículo 281 del Código Adjetivo de la materia.”* Tratamos de hacer cumplir a las Autoridades requeridas en el cumplimiento de la sentencia y que de igual forma fueron omisas ante los requerimientos del Tribunal, esta cuestión pasa a un segundo plano en esta investigación pues el principal enfoque es hacia la Autoridad condenada en el Proceso Administrativo, e incluso podríamos determinar que se puede sancionar a través del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa llevado ante el Tribunal, configurándose por tráfico de influencias o encubrimiento, el señalamiento de esta determinación radica en lo estipulado por el C.P.A.E.M. referente a las Autoridades involucradas.

Bajo este contexto y de acuerdo con el desarrollo de esta investigación, determinamos a la destitución como la principal y máxima sanción aplicable a los Servidores que son omisos ante las condenas que determinan las Salas esto opera por dos cuestiones, la primera en atención a la facultad de Sección de Sala Superior en la fase de cumplimiento y subsiguiente, por lo llevado en la fase de cumplimiento en donde fue sancionado, pero no dio cumplimiento a las mismas.

Con esto no nos limitamos a que la ley pueda aplicar de manera secundaria otra sanción atribuida al grado de Responsabilidad grave como lo es la sanción económica o la suspensión para desempeñar un cargo público, siempre que se sigan en términos de ley.

La razón de tomar la destitución como sanción a esta falta se justifica en lo actuado durante la fase de cumplimiento en el Proceso Administrativo, es decir que en virtud de que la Autoridad es ya sancionada (multada) para el cumplimiento de la ejecutoria, esta no atiende a dicho requerimiento, que muchas veces es señalado de manera urgente. Por lo tanto, una sanción económica como medida a esta falta grave no representa una sanción viable para que dicho cumplimiento se efectué, es por eso que consideramos la destitución como sanción principal y la sanción económica o inhabilitación temporal para ejercer un cargo dependerá de lo actuado durante el Proceso o en su caso dependiendo el cargo y materia del asunto.

Ahora como último punto de este apartado a continuación señalaremos las cuestiones que se regulan en la Constitución local de la entidad, la L.O.T.J.A.E.M. y el R.I.T.J.A.E.M., además las que se deben regular en el C.P.A.E.M y en la L.R.A.E.M y M. referente al incumplimiento de sentencia, para lo cual nos apoyaremos en una tabla en donde, del lado izquierdo identificaremos la regulación aplicable y del lado derecho la determinación que se debe considerar.

Como primera propuesta, señalamos unas cuestiones que la Constitución del Estado Libre y soberano de México deba considerar, referente a las faltas graves:

REGULACIÓN ACTUAL	PUNTOS A CONSIDERAR	PROPUESTA DE REGULACIÓN
<p>Artículo 130, párrafo tercero, fracción I, párrafo segundo</p> <p>Las Faltas Administrativas Graves serán investigadas y substanciadas por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y los órganos</p>	<p>Que permita una coordinación y cooperación entre las Salas Regionales, las Salas Especializadas y las Secciones de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para el incumplimiento de sentencias</p>	<p>Artículo 130, párrafo tercero, fracción I, párrafo segundo (...)</p> <p>El Tribunal de justicia Administrativa del Estado de México será la Autoridad responsable de la substanciación y sanción solo para el caso del incumplimiento de sentencias Administrativas, este</p>

internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Las demás Faltas y sanciones Administrativas que no sean calificadas como Graves, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control, quienes substanciarán los procedimientos y en su caso aplicarán las sanciones correspondientes.	dictadas por este Órgano Jurisdiccional.	deberá actuar ante una participación entre las Salas Regionales y Especializadas, misma que se deberá regir por lo determinado en la Ley de Responsabilidades y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
---	--	---

Respecto de la ley Orgánica y del Reglamento Interior del Tribunal se reconoce la facultad de Sala Superior para actuar a instancia de las Salas Regionales en caso de incumplimiento de sentencia en un Juicio Contencioso Administrativo, facultades que en términos generales se presentan de la manera siguiente:

El juicio es turnado a la Sección de Sala Superior con la intención de que sea resuelta la fase de cumplimiento por lo que vemos en el C.P.A.E.M. es a través de la destitución de la Autoridad de su cargo, empleo o comisión.

Por lo tanto, consideramos que dentro de la L.O.T.J.A.E.M señale lo siguiente:

REGULACIÓN ACTUAL	PUNTOS A CONSIDERAR	PROPUESTA DE REGULACIÓN
<p>Artículo 30</p> <p>Son atribuciones de las Secciones de la Sala Superior:</p> <p>Fracción I</p> <p>(...)</p> <p>III. Intervenir y resolver en definitiva el procedimiento de cumplimiento de sentencia, a</p>	<p>Considerar la facultad de reconocer dicha atribución ante un procedimiento regulado por el C.P.A.E.M y la L.R.A.E.M y M. que permita una colaboración entre las Salas Regionales y las Especializadas.</p>	<p>Artículo 30</p> <p>Son atribuciones de las Secciones de la Sala Superior:</p> <p>Fracción I</p> <p>(...)</p> <p>III. Colaborar, Intervenir y resolver en definitiva el procedimiento de cumplimiento de sentencia, a solicitud</p>

solicitud de las Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria y Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal;		de las Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria y Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal, a fin de que se sancione por Responsabilidad a los Servidores omisos ante el incumplimiento.
<p align="center">Artículo 30</p> <p>Son atribuciones de las Secciones de la Sala Superior:</p> <p align="center">(...)</p>	Que exista una fracción que delegue la facultad a la Sala Superior para colaborar en el cumplimiento de sentencia y sancionar la responsabilidad Administrativa de los Servidores	<p align="center">Artículo 30</p> <p>Son atribuciones de las Secciones de la Sala Superior:</p> <p align="center">(...)</p> <p>Fracción X Colaborar con las Salas Regionales y Especializadas en el procedimiento de incumplimiento de sentencia regulado por la L.R.A.E.M y M.</p>

Con el R.I.T.J.A.E.M. consideramos que no es necesario una nueva regulación pues tal como lo vimos en el apartado correspondiente de este capítulo es suficiente el señalamiento al cumplimiento de sentencia que ordena a las secciones de Sala Superior.

Respecto a las determinaciones que se deben tomar en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México tenemos lo siguiente:

REGULACIÓN ACTUAL	PUNTOS A CONSIDERAR	PROPUESTA DE REGULACIÓN
<p align="center">Artículo 281.</p> <p align="center">Párrafo II.</p> <p>Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la resolución, la sección de la sala superior podrá decretar la destitución del</p>	<p>Así como lo referente al juicio político la ley lo remite a competencia de la ley de Responsabilidades Administrativas, debe existir un apartado que remita el</p>	<p align="center">Artículo 281</p> <p align="center">Párrafo I</p> <p align="center">(...)</p> <p align="center">Párrafo II</p> <p align="center">(...)</p> <p align="center">Adhesión al artículo</p>

<p>Servidor Público responsable, excepto que goce de fuero constitucional.</p> <p style="text-align: center;">Párrafo III</p> <p>En caso de que el Servidor Público Administrativo goce de fuero constitucional, la sección de la sala superior formulará ante la Legislatura Estatal la solicitud de declaración de desafuero, en cuya tramitación y resolución se aplicarán en lo conducente las disposiciones del título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.</p>	<p>Procedimiento de destitución regulado en la L.R.A.E.M y M.</p> <p>Por lo tanto, entre el párrafo dos y tres del artículo 281, sugerimos la adición de un párrafo que remita dicha competencia ante la legislación antes mencionada.</p>	<p>En caso de destitución del Servidor Público por incumplimiento a la sentencia, se deberá entender que la Autoridad demandada incurrió en Responsabilidad Administrativa, por lo tanto, el Procedimiento y la falta aplicable deberán sujetarse a lo conducente por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.</p>
<p style="text-align: center;">Artículo 281, Párrafo III</p> <p>Las Autoridades requeridas como superiores jerárquicos, así como aquellas que se encuentren obligadas en atención a la naturaleza de sus atribuciones, incurrir en responsabilidad, por Falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las Autoridades demandadas.</p>	<p>Que las Autoridades inmersas en la omisión de la fase de cumplimiento de sentencias sean juzgadas por su falta, en términos de ley</p>	<p style="text-align: center;">Que el párrafo III del Artículo 281 determine lo siguiente:</p> <p>Las Autoridades requeridas como superiores jerárquicos, así como aquellas que se encuentren obligadas en atención a la naturaleza de sus atribuciones, incurrir en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las Autoridades demandadas, por lo tanto, el procedimiento aplicable deberá sujetarse a lo determinado por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.</p>

Ahora, La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México debe considerar:

REGULACIÓN ACTUAL	PUNTOS A CONSIDERAR	PROPUESTA DE REGULACIÓN
<p>Artículo 52.</p> <p>Para efectos de la presente Ley, se consideran Faltas Administrativas Graves de los Servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:</p> <p>5. El cohecho.</p> <p>(...)</p> <p>XIII. La obstrucción de la Justicia</p>	<p>Determinar al incumplimiento de sentencias en el catálogo de Faltas Graves y con esto remitirlo a un procedimiento regulado por la ley.</p>	<p>Artículo 52.</p> <p>Para efectos de la presente Ley, se consideran Faltas Administrativas Graves de los Servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:</p> <p>I. El cohecho.</p> <p>(...)</p> <p>XIII. La obstrucción de la Justicia</p> <p>XIV. El incumplimiento de sentencias dictadas en el Proceso Administrativo.</p>
<p>Definición de las faltas mencionadas</p> <p>Sección Primera</p> <p>Del Cohecho</p> <p>Artículo 53.</p> <p>(...)</p> <p>Sección Décima Tercera</p> <p>De la Obstrucción de la Justicia.</p> <p>Artículo 67.</p> <p>(...)</p>	<p>Que sea incluida la definición que anteriormente planteamos, referente al incumplimiento de sentencia y que exista un apartado que remita a la falta para que sea resuelta bajo un Procedimiento de Responsabilidad y sancionado a través de la Destitución.</p>	<p>Por lo tanto, debe existir</p> <p>Sección Primera Del Cohecho</p> <p>Artículo 53.</p> <p>(...)</p> <p>Sección Décima Tercera</p> <p>De la Obstrucción de la Justicia.</p> <p>Artículo 67.</p> <p>(...)</p> <p>Sección DécimoCuarta.</p> <p>Del incumplimiento de sentencias</p> <p><i>“Se presenta incumplimiento cuando en el cause ejecutoria de una sentencia dictada en un Juicio Administrativo o Fiscal y realizada la notificación del cumplimiento de la misma, la Autoridad condenada sea omisa en atender lo ordenado en la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por conducto de sus Salas Regionales, en donde el Servidor Público, ante los requerimientos realizados por las mismas, según los supuestos de la</i></p>

		<p><i>sección novena del C.P.A.E.M., no den respuesta al cumplimiento de la sentencia y por lo tanto pongan en vulneración los intereses y derechos de la parte actora reconocidos en la sentencia.</i></p> <p><i>Esto es aplicable para todas las Autoridades inmersas según el artículo 281 del Código Adjetivo de la materia.”</i></p> <p>Continuar con:</p> <p>Lo referente a esta sección, se deberá sujetar al conducente en el libro cuarto de esta ley.</p>
--	--	---

Podemos observar que en las propuestas a la L.R.A.E.M y M. determinamos una idea de un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ante esta falta, en este se deben de tomar todas las consideraciones planteadas por las leyes y que también se respeten todas las cuestiones que han sido señaladas durante esta investigación.

5.4 PROPUESTA PARA UN PROCEDIMIENTO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

Para este punto debemos aclarar que la razón de citar “libro cuarto” dentro del cuadro de propuestas, existe bajo la intención de que sea integrado este apartado para regular lo aplicable en un posible procedimiento de Responsabilidad Administrativa ante el incumplimiento de sentencia, esto existe ante la influencia de que la L.R.A.E.M. y M. regula el Juicio Político y la Declaración de Procedencia por Responsabilidad Penal en un “libro tercero.”

La razón de que sea regulado bajo un libro diferente al determinado del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México es porque las facultades para conocer sobre este asunto ya son encomendadas por la ley para las Secciones de Sala Superior por lo tanto la razón de

la destitución ya la planteamos, la cual es la definición a la falta y la sanción aplicable, ahora resta identificarlo mediante un Procedimiento.

A continuación, definiremos el procedimiento dividido en cinco partes,

Primero; Procedencia.

Segundo; Partes del Procedimiento.

Tercero; Primera etapa. Iniciación.

Cuarta; Segunda etapa, substanciación.

Quinta; Tercera etapa, Resolución.

Antes de definir las etapas señaladas aclararemos que en atención a la definición que nosotros le dimos al Incumplimiento de Sentencias como Falta Grave, las Autoridades sancionadas directamente serán aquellas que estuvieron obligadas a atender en el Proceso Administrativo el cumplimiento de la ejecutoria y que por omisión no lo hicieron, pues recordemos que basándonos en lo estipulado en el capítulo de “cumplimiento de sentencia” el requerimiento no solo se efectúa una vez o se configura de una sola forma sino que a través de los instrumentos que la ley le otorga al Tribunal, este Órgano Juzgador hace lo posible para efectuar el cumplimiento por parte de la Autoridad y que llegando hasta este planteamiento de nuestra investigación podemos observar e identificar que no siempre se puede lograr ese cometido.

PROCEDENCIA.

En términos de ley, este Procedimiento de Responsabilidad podrá iniciarse de dos maneras, la primera es de forma oficiosa, ya que, en justificación, deberá ser la Sala Regional en donde se lleve el proceso Administrativo y donde surja la falta, la que deba advertir del incumplimiento por parte de la Autoridad demandada.

La segunda forma es a instancia de la parte afectada, en caso de que la Sala Regional no inicie el Procedimiento correspondiente, el actor podrá solicitar que se remita al

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por incumplimiento de sentencia a la Autoridad demandada, por lo tanto, la Sala Regional deberá declarar procedente la solicitud de la parte afectada.

PARTES DEL PROCEDIMIENTO.

En este procedimiento intervendrán cuatro partes;

La Sala Regional actuando en la primera etapa ya sea de manera oficiosa o a solicitud de la parte afectada (instancia de la parte afectada).

La Sección de Sala Superior, cuyas facultades se verán reflejadas mayormente en la segunda fase, la substanciación del procedimiento.

La Sala Especializada, quien ejecutará y vigilará el cumplimiento de sentencia.

El Servidor Público señalado como responsable, es decir la Autoridad Demandada en el Proceso Administrativo.

PRIMERA ETAPA. INICIACIÓN.

Bajo este concepto sugerimos que, a diferencia del Procedimiento de Responsabilidad convencional, este no será conocido por la Autoridad Investigadora la razón previa recae ante los hechos notorios en los expedientes, donde la Autoridad fue requerida para el cumplimiento y fue omisa ante el desahogo de los mismos, así como los derechos que le otorga la ley en la fase de cumplimiento. entonces, de manera directa la Sala en donde se llevó a cabo el Proceso Administrativo (de la primera a la séptima en organización jurisdiccional del Tribunal) ya sea de oficio o a instancia de la parte afectada, deberá remitir el asunto ante la Sala Regional Especializada en la materia y ante la Sección de Sala Superior competente (siempre y cuando se hayan efectuado

los requerimientos a las Autoridades y las multas previstas en la sección novena del C.P.A.E.M.).

Lo primero es debido a que la Sala tenga conocimiento del asunto y teniendo la resolución de la Sección de Sala Superior, esta deba cerciorarse del cumplimiento de esta y referente a remitirlo a la Sección es por la razón de que esta subsanará el procedimiento de Responsabilidad.

Por lo tanto, tenemos que la Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria para remitir el asunto a la Sección y Sala Especializada, deberá emitir un acuerdo en donde detalle que la Autoridad no ha dado cumplimiento a la sentencia, dado los requerimientos ya señalados a la parte, por lo tanto debe declarar abierto el procedimiento de Responsabilidad Administrativa por Incumplimiento de sentencia, en este acuerdo detallará algunos antecedentes del Proceso Administrativo, como presentación y contestación de demanda, audiencia, sentencia, cause ejecutoria, fase de cumplimiento, el derecho de la Autoridad a manifestar lo que a su derecho convenga o manifestar su derecho de ampliar el término para cumplir la sentencia y lo llevado a cabo en la fase de cumplimiento como requerimientos, vistas, multas y por último el señalamiento de que dicho asunto será competencia de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

SEGUNDA ETAPA. SUBSTANCIACIÓN.

En esta etapa la Sala Regional deberá remitir el asunto a competencia de la Sección de Sala superior y dar conocimiento a la Sala Especializada competente del Procedimiento de Responsabilidad llevado a cabo, en ambos casos para resolver de forma pronta, se tendrá un término de tres días, siguiendo las reglas generales de las notificaciones.

Además de remitir el acuerdo respectivo deberá remitir el expediente como medio de prueba al incumplimiento. Ahora la Autoridad Substanciadora, que en este caso será la Sección de Sala Superior, en términos de ley deberá resolver la Responsabilidad

Administrativa a través de una resolución, la cual deberá elaborar en un término de cinco días.

Igual que en un Recurso de Revisión, la Sección de Sala Superior deberá describir un resultando, considerando y resolutivos.

En el resultando deberá integrar los actos procesales más importantes llevados durante el Juicio Contencioso Administrativo, como la admisión de demanda, contestación, audiencia, sentencia, cause ejecutoria y la fase de cumplimiento, así como la omisión al cumplimiento de los requerimientos. También se deberá de señalar la fecha de la remisión del asunto a la Sección y de donde proviene. Teniendo todo esto se dará paso a los Considerando.

La Sección manifestará su competencia para conocer del asunto, si la Sala regional está actuando de oficio o a instancia de la parte afectada, identificar el cargo, puesto o comisión del Servidor Público señalado como responsable, la Falta Administrativa Grave que se le señala y el agravio que representa el “incumplimiento de la sentencia” es decir la afectación que genera a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y buena fe del Proceso, la afectación a los intereses y derechos de la parte actora reconocidos en la sentencia, la afectación del acto declarado como invalido en la sentencia, las omisiones en la fase de cumplimiento de sentencia y el agravio a la autonomía del Tribunal para la ejecución y cumplimiento de sus fallos y procedimientos.

También deberá señalar la fundamentación que le permite llevar a cabo el Procedimiento correspondiente, es decir el artículo 130 de nuestra constitución local, artículos 2 y 281 del Código Adjetivo de la materia, artículo 52 y sección decimocuarta de la Ley de Responsabilidades, artículo 25 del R.I.T.J.A.E.M. y artículo 30 fracción III de la L.O.T.J.A.E.M.

Por último, en los resolutivos, la Sección resolverá la Responsabilidad Administrativa grave de la Autoridad, por ende, la destitución del Servidor Público y en su caso alguna otra sanción aplicable, esto dependiendo en sus afectaciones, el cargo y sus actuaciones durante el Proceso. Decretada la destitución del mismo, en términos de

ley, se dará aviso a su superior jerárquico, además deberá señalar bajo que conceptos se dará por cumplida la Sentencia del Juicio Contencioso Administrativo y el señalamiento de la Autoridad para su cumplimiento, según sea el caso.

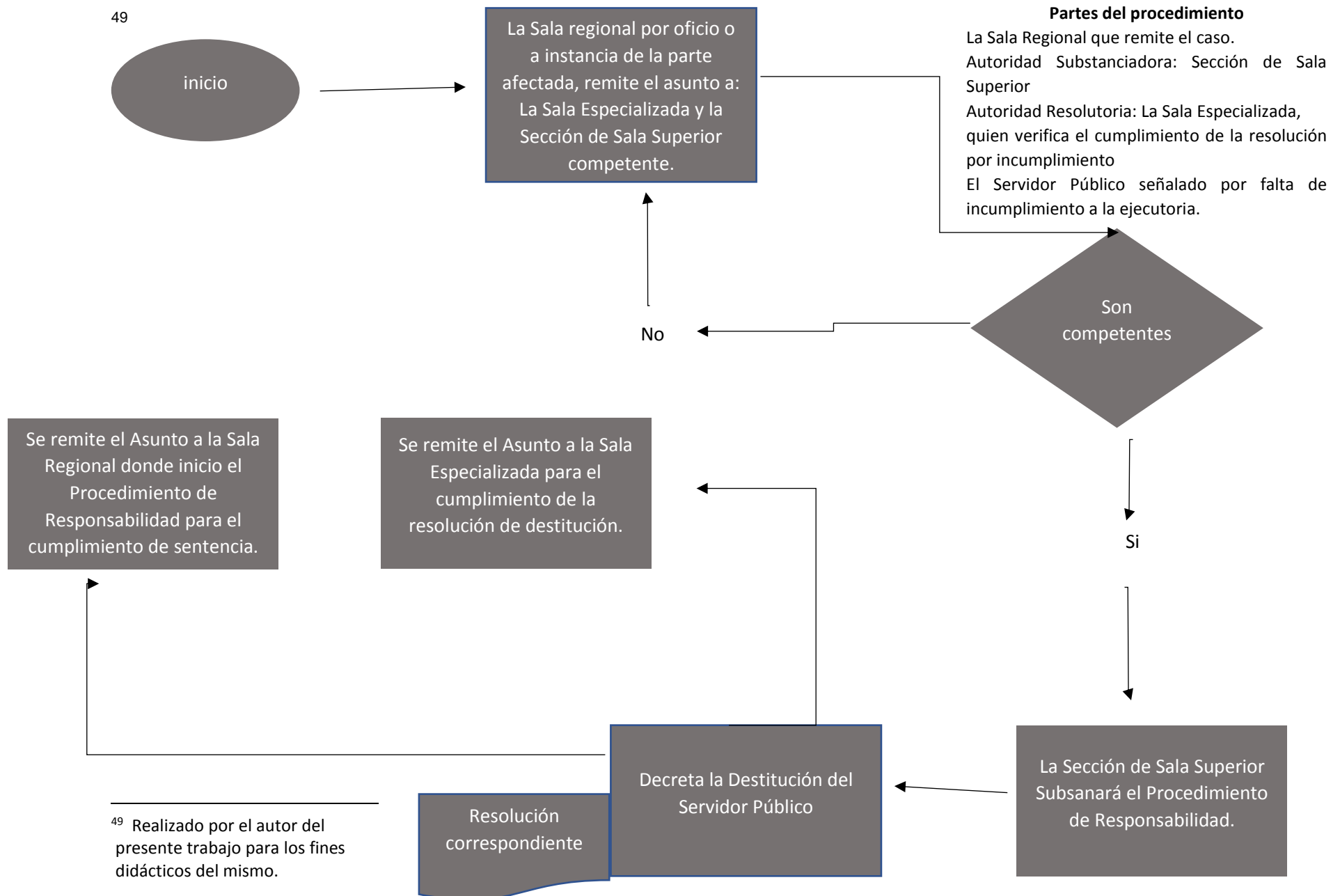
TERCERA ETAPA. RESOLUCIÓN.

Por último, la Sección remitirá la resolución respectiva a la Sala Regional y Especializada.

Lo primero es con la intención de que esta Sala ejecute la resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por Incumplimiento de sentencia y vigile el cumplimiento de la misma. La Sala Especializada deberá sujetarse a los lineamientos que señala el artículo 195 y del libro segundo, capítulo cuarto, sección segunda de la Ley de Responsabilidades. referente al cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas Administrativas graves.

El remitir la resolución junto con el expediente del Proceso Administrativo a la Sala Regional es para que esta vigile el cumplimiento de la sentencia en los lineamientos señalados por la resolución de la Sección de Sala Superior, es decir del asunto que dio origen al Procedimiento.

Ahora en términos generales el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa por incumplimiento de Sentencia, se estructura de la siguiente manera:



Como podemos observar este procedimiento que planteamos es diferente al Proceso Administrativo e incluso al propio Procedimiento de Responsabilidad ya regulado, para nosotros es importante determinar una cuestión diferente debido a la naturaleza que representa, las facultades que ya son conferidas a ciertas Autoridades para conocer del mismo y la velocidad con la que debe ser resuelto esto con el objeto de no atrasar tanto el juicio de donde nace, pero también es importante que exista la justicia fundada y motivada ante las Autoridades que no cumplen con las sentencias que dicta el Tribunal y consideramos que con la investigación y las propuestas planteadas puede lograrse la correcta y más completa impartición de la Justicia Administrativa.

CONCLUSIONES.

1.- Dentro de la investigación se cumplieron con el objetivo de desglosar las etapas procesales que se presentan en un Juicio Contencioso Administrativo, esto con la intención de poder identificar las actuaciones que permitieron a este trabajo llegar a una serie de determinaciones necesarias para poder estructurar una solución a la problemática principal.

2.- Determinar las posibles condenas a las que se llega en una sentencia que pone fin a la contienda Administrativa, permitió que fuera posible analizar las misma y determinar que resolución es la más viable para dar continuación a la investigación, que en este caso fueron las sentencias en donde se determina una invalidez del acto impugnado, en virtud de que la condena recae sobre la Autoridad demandada.

3.- Lo señalado en el “capítulo tres” referente al cumplimiento de sentencia, permitió llegar a la conclusión de que existen medidas que el Tribunal ejerce cuando no se da por cumplida una ejecutoria, pero también se deja desprotegida la regulación por parte de las Secciones de Sala Superior en el actuar ante dicho incumplimiento.

4.- Respecto al planteamiento del problema en donde se establece una falta de regulación ante las facultades de las Secciones de Sala Superior para destituir a los Servidores Públicos por incumplimiento, se determinó que algunas facultades se encuentran concedidas de manera simple en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, así como el Reglamento Interior y Ley Orgánica del propio Órgano Jurisdiccional e igual se establece que dicho procedimiento ante la destitución, no cuenta con una regulación fundada por las mismas leyes.

5.- La identificación y análisis a la Responsabilidad Administrativa permitió un acercamiento a la misma, el conocer sus faltas graves y no graves, así como las sanciones que determina cada una, hizo posible dar una estructura al establecimiento del incumplimiento de sentencia como una falta grave.

6.- El señalamiento del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa no grave y grave permitió conocer las Autoridades que son competentes para conocer de las mismas, la Secretaría de la Contraloría, los Órganos Internos de Control y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México respectivamente. Esta estructuración dio pie a que, como se pronunció en el desarrollo de la investigación, poder determinar por qué el Tribunal es el órgano encargado de sancionar el incumplimiento de sentencias, pues la naturaleza que representa dicha falta va encaminada a las facultades otorgadas para el mismo por medio de las Secciones de Sala Superior, pero también, el hecho de determinar en este trabajo al incumplimiento como una falta grave nos hace entender que es el Tribunal el Órgano Jurisdiccional factible para resolver.

7.- La investigación de las faltas ya reguladas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios fue indispensable para identificar de como esta omisión de los Servidores Públicos no puede adaptarse o sujetarse a las ya reguladas por la ley, ya sea en no grave y grave, con esto se pudo dar una definición completa al incumplimiento de sentencias, misma que sugerimos sea adicionado a las faltas previstas por dicha ley.

8.- Las Secciones de Sala Superior cuentan con facultades para conocer de ciertos procedimientos que emanan de un Proceso Administrativo, como es el caso de la excitativa de justicia, impedimentos o incluso el Recurso de Revisión, cuentan con una regulación dentro del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, caso contrario a la destitución de Servidores Públicos por parte de Sala Superior. Para este último dentro de esta investigación nos enfocamos en señalar las razones que deben ser tomada en cuenta para dicha regulación de esta facultad y de qué manera las Salas Regionales de jurisdicción ordinaria, Especializadas en Responsabilidad Administrativa y las Secciones de Sala Superior, pueden contribuir en sus facultades para un procedimiento que debe ser reconocido por las legislaciones competentes en el Estado de México.

9.- Tras el análisis a las Legislaciones señaladas en el punto 4, así como a las recomendaciones encaminadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y que dentro de la investigación se encuentran en el capítulo quinto, se llega

a la conclusión de que no es necesaria la existencia de una nueva ley, sino que dicho análisis va encaminado a que las leyes existentes regulen el incumplimiento de sentencias emitidas en el Juicio Contencioso Administrativo en donde se condene a las Autoridades Estatales y Municipales.

10.- Con relación al punto 9, el apartado más importante para la complementación de la legislación la encontramos en el C.P.A.E.M. y en la L.R.A.E.M y M. pues como es posible de identificar en las leyes, la fase de cumplimiento de sentencia no hace mayor mención a la destitución y en la ley competente a la Responsabilidad Administrativa, no existe un procedimiento para dicha facultad ni el señalamiento a la falta como Responsabilidad Administrativa.

11.- Sala Superior, jerárquicamente como el órgano más alto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, debe tener una mejor regulación en las facultades que le son conferidas por la ley.

12.- Fue posible identificar un procedimiento aplicable a dicha falta, pues como se señaló reiteradamente se requirió de uno diferente al regulado debido a la naturaleza del mismo, si bien nos regimos por el procedimiento de Responsabilidad existente, fue preciso una serie de cambios necesarios que se justifican en razón de que esta falta a diferencia de las ya reguladas deviene de un Juicio Contencioso Administrativo, por lo que existiendo las Salas Regionales, Especializadas y Secciones de Sala Superior, resulta dable su colaboración pues recordemos que el Tribunal es pilar en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, la existencia de poder colaborar estos órganos juntos como Autoridades Substantiadoras y Resolutoras, que, a diferencia del Procedimiento existente, este no cuenta con una Autoridad Investigadora pues dicha función se ve reflejada en el actuar y en los requerimientos llevados en el Proceso Administrativo.

Con esto reiteramos que la sanción al incumplimiento de sentencia es una Responsabilidad Administrativa única pues a diferencia de las ya reguladas que se pueden presentar en diferentes planteamientos, el incumplimiento de sentencia solo se configura a través del Proceso Administrativo siendo no un procedimiento a parte sino configurándose como una parte del Proceso.

13.- La colaboración entre las Salas Especializadas, las Ordinarias y Secciones de Sala Superior permiten la realización de un trabajo conjunto, que otro procedimiento o proceso no lo refleja, pero este a su vez desempeña la tarea de proteger los derechos e intereses de los gobernados establecidos en la sentencia, pues no solo los salvaguarda al vigilar el cumplimiento de esta, sino que además sanciona a las posibles Autoridades Responsables ante dicho incumplimiento.

14.- La sanción por incumplimiento de sentencia y como resultado la destitución del Servidor Público es aplicable a toda Autoridad demandada en el proceso Administrativo y que, agotadas las etapas de la fase respectiva, no efectúa por propia voluntad dicho cumplimiento, por lo tanto, lo principal es sancionar a los responsables y garantizar la protección efectiva al gobernado que es reconocible a través de la Justicia Administrativa.

15.- Las Autoridades condenadas en la sentencia no deberían ser la únicas en ser juzgadas ante un procedimiento de Responsabilidad Administrativa, sino que todas las Autoridades inmersas en el incumplimiento de la sentencia deben ser sancionadas por sus omisiones, dicha conclusión se espera sea materia de un próximo proyecto de investigación.

16.- En atención al exceso o defecto en la ejecución de sentencia sugerimos que tanto el Tribunal como el ciudadano deben hacer puntos específicos en esta cuestión, para evitar caer en otro tipo de Responsabilidades, que si bien forman parte del cumplimiento de sentencia, no pueden configurarse a través de esta falta, pues dicha sanción recaería en una Falta Administrativa encaminada al Trafico de influencias o Abuso de funciones, esto en el supuesto de que dicho cumplimiento excesivo genere beneficio a la parte actora y tanto esta como el Tribunal no adviertan a la Autoridad demandada.

17.- La idea de regular un procedimiento que sancione con destitución al Servidor Público por incumplimiento a la ejecutoria, deviene a que es necesario una regulación más completa en algunas etapas del Proceso Administrativo, pues con base en la experiencia se ha identificado la falta de regulación concreta en la fase de

cumplimiento del Proceso Administrativo, pues es labor del juzgador interpretar dicha fase para su aplicación en el momento procesal oportuno.

18.- La resolución a la que se llegó en esta investigación es que las Autoridades de carácter Estatal y Municipal no deben de vulnerar más los derechos de los gobernados, la idea de implementar un procedimiento que sea justo, apegado a la ley y que sancione las actuaciones de los Servidores Públicos Estatales y Municipales, resulta importante y fundado debido a que, la Materia Administrativa en el Estado de México está sufriendo grandes cambios, uno de ellos es la colaboración del Tribunal en la lucha contra la corrupción, pero también a la fecha de este trabajo, los problemas de salud que se viven en el país, han impulsado a los organismos jurisdiccionales a cambiar su manera de impartir justicia, con esto nos referimos al Tribunal Electrónico, que permite un proceso más rápido en las actuaciones de la Contienda Administrativa, es por eso que fortalecer las figuras reconocidas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, es una tarea fundamental que se debe seguir a fin de que se cumpla lo cometido por la justicia Administrativa, la protección de los gobernados ante los Actos u omisiones de la Administración Pública.

19.- En atención a la justificación de nuestro Procedimiento, se cumplen con los objetivos planteados, pues recordemos que este Procedimiento surge como una herramienta a través de la cual el Tribunal pueda garantizar la protección a los derechos e intereses del afectado, reconocidos en la sentencia y en su caso los gobernados puedan acudir a la ley para exigir al Tribunal la protección de estos mismos derechos.

FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRÁFICA

Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Manuel. (2004). Compendio de Derecho Administrativo (págs. 293-295). México: Porrúa.

Ezquerro, L.D. Sergio. (2010). El Juicio Contencioso Administrativo Federal La improcedencia y el sobreseimiento en el Juicio Contencioso Administrativo. Revista Enciclopédica Tributaria Opciones Legales-Fiscales, 1.

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén. (2009). Cosa juzgada y precedente en la acción de inconstitucionalidad mexicana. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 239-260.

Fernández Madrazo, Alberto. (2011). El Derecho Procesal Administrativo. Revista Cultura Jurídica, 35-52.

Fernández Ruiz, Jorge. (2016). Acto y Procedimiento Administrativo. En J. Fernández, Derecho Administrativo (págs. 129-160). México: Biblioteca Constitucional INEHRM.

García Morón, Myrna Araceli. (2019). Historia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En J. R. Fabiola Mondragón, Antología de Tribunales de Justicia Administrativa en la Historia (págs. 143-162). México: Asociación de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos A.C.

García Ramírez, Sergio y Uribe Vargas Erika. (2014). VII Obligaciones de los Servidores Públicos. En G. R. Erika, Derechos de los Servidores Públicos (págs. 143 -184). México: Instituto Nacional de Administración Pública,

García Romero, Lucila. (2012). La Acción Procesal. En G. Lucila, Teoría general del proceso (págs. 50-67). México: Red Tercer Milenio S.C.

Garzón Saladén, Álvaro. (2015). El Silencio Administrativo. Revista Cultural UNILIBRE, 85-95.

Gómez Lara, Cipriano. (2012). Sentencia. Requisitos Sustanciales. En Teoría General del Proceso (págs. 331-334). México: Oxford.

Gómez Lara, Cipriano. (2012). Sentencia. Requisitos Formales. En C. Gómez, Teoría General del Proceso (págs. 327-330). México: Oxford.

Gutiérrez Mendoza, Odilisa. (2014). El Juicio de Residencia Español, Antecedente del Juicio de Responsabilidad y no del Juicio De Amparo Mexicano. Revista de Derecho UNED, 271-294.

López Olvera, Miguel Alejandro y Cienfuegos Salgado, David. (2005). Los Principios del Procedimiento Administrativo. En D. Cienfuegos y M. López, Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz. Tomo I Derecho administrativo (pág. 173. 197). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.

López Olvera, Miguel Alejandro. (2013). Antecedentes. En M. López La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en México (págs. 7-33). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.

López Olvera, Miguel Alejandro. (2013). Aspectos Generales. En M. López, La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en México (págs. 35-58). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.

López Ruiz, Miguel y López Olvera, Miguel Alejandro. (2007). Las resoluciones. Aspectos Formales. En, Estructura y Estilo de las Resoluciones Judiciales (págs. 19-40). México: DR Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Montilla Bracho, Johanna H., (2008). La acción procesal y sus diferencias con la pretensión y demanda. Cuestiones Jurídica, 89-110.

Muciño Escalona, Jorge Esteban. (2010). Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instrumento de democracia en el Estado de México. En Tribunal

de lo Contencioso Administrativo, Justicia Administrativa (págs. 81-98). México: Gobierno del Estado de México.

Nava Gomar, Salvador Olimpo. (2010). La sentencia como palabra e instrumento de la comunicación. Revista Justicia Electoral, 45-76.

Olmos Jasso, María Teresa. (2010). Cumplimiento de las Sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, 1-38.

Rangel Charles, Juan A. y Sanromán Aranda, Roberto. (1995). Conceptos Jurídicos Fundamentales. En R. C. Roberto, Derecho de los Negocios, Tópicos de Derecho Privado (págs. 17-49). México: Thomson Editorial Mexicana S.A de C.V.

Serra Rojas, Andrés. (2003). Teoría del Acto Administrativo. Derecho Administrativo (págs. 237-272). México: Porrúa.

Secretaría de la Función Pública. (2017). ¿Qué es un Conflicto de Interés? En S.F. P., Guía para Identificar y Prevenir Conductas que Puedan Constituir Conflicto de Interés de los Servidores Públicos (pág. 7). México: Secretaría de la Función Pública.

Zavala Razo, Jorge. (2001). Aspectos Conceptuales del Sobreseimiento. En J. Zavala, El Sobreseimiento en el -Juicio de Nulidad en Materia Fiscal Federal (págs. 23-61). México: Indetic.

CIBERGRAFÍA

Centro de Investigaciones Jurídicas en Línea, C. d. . (Sin Fecha). informe de investigación CIJUL . 17 julio 2020, de Centro de Investigación jurídica en línea Sitio web:

file:///C:/Users/alan/Downloads/la_responsabilidad_disciplinaria_del_servidor_publico.pdf

Contraloría, S. d. (Sin Fecha). Sanciones. 27 de julio de 2020, de Contraloría DF. gob. Sitio web:

<http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/sans.php#:~:text=1.,indebida%2C%20sufrir%C3%A1%20una%20sanci%C3%B3n%20mayor.>

Rivera Montes de la Oca, Luis. (sin fecha). La justicia Administrativa en el Estado de México. 26 abril 2020, de Archivos Jurídica UNAM Sitio web:

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2301/17.pdf>

Sistema de Información Legislativa. (Sin Fecha). Sistema de Información Legislativa. Obtenido de Diccionario de Términos Parlamentarios. 08 julio 2020, de SIL Sitio web:

<http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=138>

Silva. Guerrero, Lucila. (sin fecha). El Proceso en la Justicia Contencioso Administrativo del Estado de México. 26 de marzo de 2020 de biblioteca jurídica UNAM:

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2391/22.pdf>

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. (Sin Fecha). Estructura Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 24 junio 2020, de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Sitio web: <https://trijaem.gob.mx/jurisdiccional/>

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. (Sin Fecha). Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México 20 de abril de 2020. Obtenido de Inicio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México:

<https://trijaem.gob.mx/>

LEGISLACIÓN

FEDERAL

(C.P.E.U.M.) Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

LOCAL

(C.P.E.L y S. M.) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

(C.P.A.E.M.) Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México

(C.A.E.M.) Código Administrativo del Estado de México

(L.R.A.E.M y M.) Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

R.I.T.J.A.E.M: Reglamento interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

(L.O.T.J.A.E.M) Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

(C.F.E.M y M.) Código Financiero del Estado de México y Municipios

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de 1994.

GLOSARIO

C.A.E.M: Código Administrativo del Estado de México.

C.P.A.E.M: Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México

C.P.E.U.M.: Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSTITUCIÓN LOCAL: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

LEY ADJETIVA: Referente al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

LEY SUSTANTIVA: Referente al Código Administrativo del Estado de México.

LEY DE RESPONSABILIDADES: Referente a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL: Referente a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

L.O.T.J.A.E.M: Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

L.R.A.E.M y M: Ley de Responsabilidades del Estado de México y Municipios.

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL: Referente al Reglamento interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

R.I.T.J.A.E.M: Reglamento interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA: A la Secretaria de la Contraloría del Estado de México.

RESOLUCIÓN: A las decisiones finales o de trámite llevadas a cabo en el Procedimiento Administrativo y Responsabilidad Administrativa, así como a las

disposiciones en común para el Proceso y Procedimiento Administrativo según lo estipulado por la ley adjetiva.

SENTENCIA: Instrumento que pone fin al Proceso Administrativo.

TRIBUNAL: Referente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

U.M.A: Unidad de Medida y Actualización.